Com. Economía

Proy 10512 y 10752

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite Documentario
29 MAYO 2025
RECIBIDO
Firma: Hora: 16:15

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Lima, 29 de mayo de 2025

OFICIO Nº 181 -2025 –PR

Señor
EDUARDO SALHUANA CAVIDES
Presidente del Congreso de la República
Presente.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con relación a la Autógrafa de Ley que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos. Al respecto, consideramos conveniente observarla por lo siguiente[1]:

De la Autógrafa de Ley

1. La autógrafa contiene sesenta y seis (66) artículos, diecinueve (19) disposiciones complementarias finales, una (1) disposición complementaria transitoria, y una (1) disposición complementaria derogatoria. A continuación, se describe su estructura:

   a) Título I: Título preliminar

   Regula el objeto, ámbito de aplicación, la declaratoria de interés de la promoción de la inversión privada, y los principios.

   b) Título II: Marco Institucional

   Capítulo I: Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada
   Define el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, se establecen las funciones del (i) Ministerio de Economía y Finanzas, (ii) las entidades públicas titulares de proyectos (Proinversión, el gobierno regional y el gobierno local), (iii) el Comité de Promoción de la Inversión Privada, (iv) los organismos promotores de la inversión privada, (v) los organismos reguladores, (vi) la Contraloría General de la República. También se establecen disposiciones para el seguimiento de inversiones y soporte especializado.

   En el marco de la facultad discrecional de las entidades públicas, la autógrafa señala que los informes de control no pueden incluir en ninguno de sus extremos responsabilidad penal sin que se haya identificado de manera concurrente los elementos del tipo y las pruebas suficientes que acrediten la presunta comisión del delito.

   Capítulo II: Proinversión
   Se establece que Proinversión es un organismo técnico especializado, su estructura orgánica básica y sus funciones. Se regula el concepto y finalidad del Fondo de Promoción de la Inversión Privada. También incluye los requisitos para asumir los cargos directivos. Se establece la regulación de los seguros de responsabilidad para funcionarios, la publicidad de acuerdos y opiniones.

1 Sobre la base del Informe N° 0795-2025-MTC/08.

c) **Título III: Modalidades de participación de la inversión privada**

Capítulo I: Asociaciones Público Privadas

Subcapítulo I: Disposiciones Generales
Se establece la definición de asociaciones público privadas. Se define contratos de asociación público privadas, su clasificación, las garantías del estado en estos proyectos, los compromisos firmes y contingentes, la declaración de uso de recursos públicos y la capacidad de financiamiento del proyecto de asociación público privada, y la regulación para el otorgamiento de seguridades y garantías.

Se establecen los impedimentos de participar como postores o inversionistas, de forma directa o indirecta.

Subcapítulo II: Reglas procedimentales
Se establecen las fases de los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Asociación Público Privada (fase de planeamiento y programación, fase de formulación, fase de estructuración, fase de transacción, fase de ejecución contractual).

Subcapítulo III: Aprobaciones y opiniones
Se regula la elaboración del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas, la opinión previa al informe de evaluación, los criterios para la incorporación de los proyectos al proceso de promoción, y la opinión previa a la versión inicial del contrato en la fase de estructuración y final del contrato en la fase de transacción. También se regulan las opiniones e informes generales en todas las fases de los proyectos.

Subcapítulo IV: Iniciativas Estatales
Se establece la definición de iniciativas estatales y el procedimiento simplificado de asociaciones público privada de iniciativa estatal.

Subcapítulo V: Iniciativas privadas
Se definen las iniciativas privadas, el procedimiento de presentación de iniciativas privadas cofinanciadas, y el reembolso de gastos a favor del proponente cuando presenta una oferta válida y no resulta favorecida.

Capítulo II: Proyectos en activos
Se establece la definición de proyectos en activos, y se regulan las iniciativas estatales y privadas sobre proyectos en activos.

d) **Título IV: Ejecución contractual**

Capítulo I: Desarrollo de los proyectos de Asociación Público Privada
Se establecen los plazos de vigencia para los proyectos desarrollados bajo la modalidad de asociación público privada, el seguimiento y administración de la ejecución contractual, el régimen de bienes de la asociación público privada, el fideicomiso que se puede constituir en una asociación público privada, la regulación de las modificaciones contractuales, de solución de controversia, la supervisión de los contratos, y los pagos por compensación.

Capítulo II: Registros
Se regulan los registros existentes: Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público Privadas, Registro de compromisos y el Registro contable. Asimismo, se regula la responsabilidad de la remisión de información a los registros.

e) **Disposiciones complementarias finales**
Se establecen disposiciones sobre la vigencia, el plazo para la aprobación del reglamento, disposición sobre referencias normativas a las leyes que reemplaza esta autógrafa de ley, adecuaciones a reglamentos del Ministerio de Economía y Finanzas y Proinversión, la transferencia de acervo documentario, bienes y personal. También regula la escala salarial y remuneraciones de Proinversión, la excepción al régimen laboral del Servicio Civil y su incorporación al régimen 728.

Se establece que, hasta el 31 de diciembre de 2026, es el plazo para la presentación de iniciativas privadas cofinanciadas para el desarrollo de proyectos de asociaciones público privadas en infraestructura pública, servicios públicos o servicios vinculados a estos, de alcance nacional. La norma establece también la creación de un Fondo para la administración de la retribución de contratos de concesión de infraestructura de transporte.

f) **Disposición Complementaria Transitoria**
Se señala que los proyectos de asociación público privada, indistintamente que se hayan originado por iniciativa estatal o iniciativa privada que, a la fecha de promulgación de la presente ley se encuentren en la fase de Transacción se sujetan al procedimiento aplicable al momento de su admisión a trámite.

g) **Disposición Complementaria Derogatoria**
Se deroga el Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activo y el Decreto Legislativo N° 1543, Decreto Legislativo que dicta medidas para mejorar la gestión de proyectos y los procesos de promoción de la inversión privada.

Observaciones a la Autógrafa de Ley

2. Al respecto debemos señalar que mediante el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y sus modificatorias, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país.

   En el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el 28 de febrero de 2025 el MTC emitió la Resolución Ministerial N° 099-2025-MTC.01 que aprueba el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Sector Transportes y Comunicaciones para el periodo 2026 – 2028, dicho documento contiene los indicadores de brechas, el diagnóstico de brechas y los criterios para la priorización de las inversiones, así como, la cartera de inversiones del Sector, e incluye, entre otros, el cofinanciamiento estimado para los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante APPs cofinanciadas.

   Por otro lado, con Resolución Ministerial N °045-2024-MTC/01 del 31.01.2024 se aprobó el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas (IMIAPP) 2024-2026 del MTC el cual materializa la planificación de los proyectos y de los compromisos, firmes o contingentes, correspondientes a APPs, con concordancia con la Programación Multianual de Inversiones, y que incluye los potenciales proyectos de APP y de PA, a fin de ser incorporados al Proceso de Promoción en los siguientes tres (3) años a su elaboración.

Sobre ello, en el IMIAPP 2024-2026 del MTC se han identificado 35 proyectos que se encuentran en proceso de promoción o iniciarán en los próximos 3 años, y se muestra la priorización del grupo de 25 proyectos de APP, clasificados como cofinanciados, los cuales se pueden revisar en el siguiente enlace web: https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/5150559-045-2024-mtc-01.

En concreto, respecto del sector comunicaciones se han incluido lo siguientes proyectos en el IMIAPP 2024-2026 del MTC:

Nro.	***Proyecto***	***Prioridad***
01	*Operación y Mantenimiento de la RDNFO*	*18*
02	*Bandas 5G - Banda de Frecuencias 2.3 GHz (2,330 MHz – 2,360 MHz)*	*6*
03	*Bandas 5G - Banda de Frecuencias 3.5 GHz (3,300 – 3,400 MHz y 3,600 – 3,800 MHz) y la liberación y/o reordenamiento del rango de frecuencia de 3,400 – 3,600 MHz*	*7*
04	*Bandas 5G - Banda de Frecuencias 26 GHz (25.9 – 26.7 GHz)*	*8*

En ese sentido, las medidas propuestas en la Autógrafa de Ley objeto de análisis tendrán impactos directos respecto de la participación del MTC en los procesos para el desarrollo de proyectos de inversión bajo las modalidades de APPs y PA que se determinan teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las metas de cierre de brechas prioritarias del sector.

Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, debemos precisar que es obligatorio que la Autógrafa de Ley cuente con Dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República y que dicho dictamen sea publicado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 73, 78 y el numeral 2 del artículo 31-A, del Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso de la República, por tratarse de una iniciativa legislativa que contiene medidas tributarias y presupuestales.

Al respecto, conforme el artículo 70 del Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso de la República los dictámenes son los documentos que contienen una exposición documentada, precisa y clara de los estudios que realizan las Comisiones sobre las proposiciones de ley y resolución legislativa que son sometidas a su conocimiento, además de las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho estudio. Los autores de los proyectos son invitados a las sesiones cuando se traten sus proyectos.

Dicho artículo establece además que los dictámenes deben ceñirse a criterios de técnica legislativa. Incluyen:

1. La exposición del problema que se pretende resolver.
2. Una sumilla de las opiniones que sobre el proyecto de ley hubiesen hecho llegar las organizaciones ciudadanas.
3. Una sumilla de las opiniones técnicas que sobre el proyecto de ley hubiesen hecho llegar las instituciones públicas y privadas.
4. La referencia al estudio de antecedentes legislativos.
5. El efecto de la propuesta sobre la legislación nacional, con precisión de las normas cuya derogación o modificación se propone.
6. La ponderación del análisis costo-beneficio de la futura norma legal, incluyendo los efectos monetarios y no monetarios de la propuesta, el impacto económico, cuando corresponda también el impacto presupuestal, la identificación de los sectores que se beneficiarían o perjudicarían con la propuesta del dictamen; y, cuando

corresponda, su impacto ambiental. Los dictámenes pueden ser en mayoría, en minoría y por unanimidad."

Sobre lo mencionado, **se verifica del portal del Congreso que la iniciativa legislativa fue exonerada del Dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República. Sin embargo, los artículos 73, 78 y el numeral 2 del artículo 31-A del Reglamento de Congreso, establecen que no se puede exonerar de la emisión y publicación de dictamen a las iniciativas legislativas que propongan normas sobre materia tributaria o presupuestal**.

Por lo tanto, se ha identificado un vicio en el proceso de emisión de la Autógrafa de Ley, pues dicha propuesta normativa contiene medidas de materia tributaria y presupuestas que a continuación se detallan:

- Medida Tributaria: La Décimo Octava Disposición Complementaria Final de la Autógrafa de Ley propone crear el Fondo para la administración de la retribución de contratos de concesión de infraestructura de transporte (FONRECIT) que permita el uso y disposición a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de los recursos pagados por los concesionarios del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez" y del Contrato de Concesión del Tramo Vial Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica (Red Vial 6), para el desarrollo de inversiones de infraestructura de transporte y/o actividades, en el marco de lo establecido en los referidos contratos.
- Medida Presupuestal: La Décimo Novena Disposición Complementaria Final de la Autógrafa de Ley autoriza el MEF a aprobar una nueva escala de ingresos de Proinversión, y exonera a dicha agencia de los establecido en el artículo 6 y en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley N° Ley N° 32185, Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025.

En ese sentido, la falta de emisión y publicación del Dictamen constituye un vicio en el proceso de aprobación de la norma, contraviene el Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso de la República, por lo cual es necesario que Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera emita el dictamen en el que se defina de manera precisa y clara el problema público que se busca resolver, las causas que lo originan, sus impactos comprobados y la magnitud del mismo teniendo en cuenta la evaluación del cumplimiento de la normativa vigente, así como el análisis de alternativas regulatorias y el análisis costo beneficio correspondiente, ello con la finalidad de que los ciudadanos y otros actores relevantes puedan entender las razones de la propuesta normativa, lo que facilitará la aplicación de la norma, el control social y la evaluación de la actuación del legislador.

3. En adición a lo señalado en numeral precedente debemos manifestar lo siguiente:

En relación al artículo 5 de la Autógrafa de Ley

Respecto del numeral 5.4 del artículo 5 de la Autógrafa de Ley, es necesario que se justifique en el Dictamen de la Autógrafa de Ley la idoneidad y necesidad de la medida de suprimir la competencia de la Dirección General de Política e Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP) del MEF para emitir opinión vinculante, en el ámbito administrativo, sobre la interpretación y la aplicación del marco normativo de del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, y de otorgar dicha función a Proinversión, pues podría implicar que dicha agencia actúe como juez y parte en los proceso de promoción de la inversión, ya que está asumiendo la calidad de entidad titular de los proyectos del gobierno nacional.

Al respecto la Autógrafa de Ley establece que Proinversión es el ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (en reemplazo de la DGPPIP del MEF, y que, además, dicha agencia asume, entre otras, la competencia de emitir opinión vinculante exclusiva y excluyente, en el ámbito administrativo, sobre la interpretación y la aplicación de la Autógrafa de Ley y en general del marco normativo de dicho sistema.

Sin embargo, conforme la Autógrafa de Ley le otorga a Proinversión la competencia exclusiva en caso de proyectos del Gobierno Nacional, para de diseñar, conducir y concluir el proceso de promoción de la inversión privada mediante las modalidades de Asociación Público Privada y de Proyectos en Activos, por lo tanto, las dudas en la aplicación del marco normativo del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada se generarán en su mayoría en la actividad que desarrolle Proinversión, que al mismo tiempo será la encargada de absolverlas a través de su opinión vinculante, lo cual podría acarrear cuestionamientos por parte de los inversores.

En relación al artículo 7 de la Autógrafa de Ley

Respecto del artículo 7 de la Autógrafa de Ley, es necesario que se justifique en el Dictamen de la Autógrafa de Ley la idoneidad y necesidad de la medida de suprimir a los Ministerios como Entidades Públicas Titulares de Proyectos (EPTP) a desarrollarse mediante las modalidades al APPs y PA, y de establecer que dicha titularidad recae únicamente en Proinversión para los proyectos del gobierno nacional, pues podría implicar que los Ministerios no participen en ninguna de la etapas del ciclo de inversión de dichos proyectos, dificultando por lo tanto la correcta planificación de las inversiones y su alineamiento con las políticas de cierre de brechas de cada sector.

Al respecto, la Autógrafa de Ley suprime las competencias de los Ministerios para identificar y priorizar los proyectos a ser desarrollados bajo las modalidades de APPs y PA, así como para elaborar la declaración de uso de recursos públicos (que contiene una proyección de los gastos requeridos para el financiamiento del proyecto de APP), el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas (que sirve para planificar el desarrollo de dichos proyectos de inversión). Tampoco podrán, formular los proyectos a ser ejecutados bajo dichas modalidades.

Además, la aprobación de la Autógrafa de Ley supone que los Ministerio pierdan la competencia para emitir opinión previa favorable en el desarrollo de los procesos de promoción de la inversión privada respecto de los aspectos técnicos del diseño del proyecto que generen obligaciones y responsabilidades contractuales a cargo del Estado.

La Autógrafa de Ley le otorga a Proinversión la competencia exclusiva en caso de proyectos del Gobierno Nacional, para diseñar, conducir y concluir el proceso de promoción de la inversión privada mediante las modalidades de APPs y de PA, en su calidad de Organismo Promotor de la Inversión Privada, por lo tanto, se le otorga las siguientes competencias, en reemplazo de los Ministerios:

- Actúa como Unidad Formuladora, es decir formula proyectos bajo la modalidad de Asociación Público Privada.
- Sustentar la capacidad de financiamiento o la capacidad presupuestal, según corresponda, para asumir los compromisos de los contratos de Asociación Público Privada y de sus modificaciones. Además, se establece que dicha capacidad de financiamiento estará considerada dentro del presupuesto de Proinversión.
- Elaborar los estudios técnicos para el Informe de Evaluación, (realiza el diseño y/o evaluación del Proyecto en la fase de formulación)

- Diseña el proyecto como Asociación Público Privada, incluida su estructuración económico financiera, mecanismo de retribución en caso corresponda, asignación de riesgos y diseño del contrato.
- Suscribir los contratos bajo la modalidad de Asociación Público Privada.
- Declarar la suspensión o caducidad del contrato, cuando concurran las causales previstas en el mismo.
- Hacer efectivas las penalidades por incumplimiento del contrato, salvo que dicha función haya sido delegada al organismo regulador respectivo.
- Acordar la modificación de los contratos
- Gestionar y administrar los contratos que suscriban, derivados de las modalidades de APPs y Proyectos en Activos, y cumplir las obligaciones contractuales a su cargo.
- Efectuar el seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos.
- Vela por el cumplimiento de las condiciones y términos propuestos en las ofertas técnica y/o económica del adjudicatario del proceso de promoción

Sin embargo, excluir la participación de los Ministerios de todas las fases del ciclo de Inversión de los proyectos ejecutados bajo la modalidad de APPs y PA, independientemente de su clasificación y origen, pueden acarrear consecuencias negativas para el desarrollo de los sectores, pues se debe tener en cuenta que la planificación y elección de los proyectos y de los compromisos, firmes o contingentes, correspondientes a APPs, se realiza teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las metas de cierre de brechas prioritarias establecidas en la Programación Multianual de Inversiones elaborada en el marco de las normas que regulan el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Por lo tanto, es necesario que el Congreso de la República evalúe mecanismos idóneos que permitan la participación de los Ministerios en el ciclo de Inversión de los proyectos ejecutados bajo la modalidad de APPs y PA, que permitan, por ejemplo, la correcta priorización de iniciativas de cara a las políticas de cierre de brechas de servicios de la especialidad de cada Ministerio, así como el correcto diseño del proyecto en atención a las particularidades del servicio público.

En relación al artículo 11 y 14 de la Autógrafa de Ley

Respecto de los numerales 11.4 del artículo 11, y de los numerales 14.2 y 14.5 del artículo 14 de la Autógrafa de Ley; es necesario que el Congreso de la República solicite la opinión de la Contraloría General de la República, pues en el numeral 11.4 limita la potestad sancionadora de dicha entidad a únicamente la supervisión de la legalidad en la ejecución del presupuesto y las operaciones de endeudamiento público, excluye explícitamente a los demás actos de las entidades públicas, funcionarios o servidores. También respecto de los numerales 14.2 y 14.5 pues establecen parámetros para la validez de los informes de control y la imposibilidad de que las resoluciones judiciales o laudos arbitrales que resuelvan controversias derivadas de contratos sean empleadas para imputar responsabilidad funcional.

En relación al artículo 13 de la Autógrafa de Ley

Respecto del artículo 13 de la Autógrafa de Ley, es necesario que se precise su alcance, pues establece el deber de Proinversión de dar prioridad a los proyectos a desarrollarse mediante Asociación Público Privada, "en la valoración y trámites respecto del cumplimiento de los requisitos para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones que se requieran para el inicio y continuación de obras", sin embargo dicho deber era aplicable a los Ministerios que ostentaban competencias para otorgar dichas licencias, permisos y autorizaciones, y no así a Proinversión que no cuenta con dichas competencias, por lo cual no queda claro como dicha agencia cumplirá con el señalado deber de prioridad.

En relación al artículo 15 de la Autógrafa de Ley

Respecto del numeral 1 del numeral 15.5 del artículo 15 de la Autógrafa de Ley, es necesario que se defina el contenido de la nueva función de Proinversión de la "promoción y asistencia a la inversión extranjera en otras actividades extranjeras" pues no se ha desarrollado dicho extremo en la propuesta normativa.

En relación al artículo 17 de la Autógrafa de Ley

Es necesario que se reevalúe el contenido del artículo 17 de la Autógrafa de Ley, en el extremo que establece que la "Presidencia Ejecutiva" de Proinversión constituye la máxima autoridad de dicho organismo, pues ello contraviene lo dispuesto en el numeral 1 del segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, que establece que los Organismos Técnicos Especializados están dirigidos por un Consejo Directivo.

Además de ello, el artículo 17 de la Autógrafa de Ley traslada las actuales competencias del Consejo Directivo de Proinversión a la Presidencia Ejecutiva, entre ellas, funciones como la de decidir la incorporación y la exclusión de proyectos del proceso de promoción, lo que significa que se concentra dicha decisión en una sola persona y se resta a la actual participación que tienen los cuatro Ministros de Estado de los sectores cuya cartera de proyectos incorporados al proceso de promoción es de mayor valor monetario.

Dicha medida podría traer consecuencias perjudiciales al momento de elegir los proyectos de inversión prioritarios, pues ya no se contaría con la opinión de los sectores que regulan los servicios públicos que se prestarán a través de los proyectos implementados bajo las modalidades de APPs.

Además, se debe tener en cuenta que, en el numeral 3 del numeral 14.2 del artículo 14 de la Autógrafa de Ley, se establece como requisito para ser Presidente Ejecutivo "Acreditar por lo menos, estudios de maestría concluidos", sin embargo, actualmente para el Director Ejecutivo de Proinversión se exige que dichos estudios sean "en materias relacionadas a la actividad objeto de competencia", por lo tanto, la propuesta normativa le resta el componente de especialidad que requiere el cargo de Presidente Ejecutivo, lo cual podría ser objeto de cuestionamiento por parte de la población.

En relación al artículo 27 de la Autógrafa de Ley

Respecto del numeral 27.2 del artículo 27 de la Autógrafa de Ley, es necesario que Congreso de la República detalle el alcance de dichas medidas, pues no queda claro a cargo de qué presupuesto se financiarán los compromisos firmes que Proinversión asuma como entidad titular de proyectos, pues en el numeral 27.2 de la Autógrafa de Ley, se señala que dicho compromisos se financian a cargo del presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas, lo que podrían dar en tender que implica usar los recursos presupuestales de los Ministerios, que perdieron su calidad de titulares de proyectos. Por lo tanto corresponde precisar la redacción del referido numeral 27.2.

La fórmula normativa de la Autógrafa de Ley presenta inconsistencias respecto de la existencia del Informe de Evaluación, que conforme la normativa vigente forma parte de la fase de formulación, sin embargo, en el proyecto normativo materia de análisis se ha eliminado en dicha fase la referencia a dicho Informe (artículo 36), pero en diferentes partes de la propuesta normativa se sigue haciendo mención al Informe Evaluación, por ejemplo, entre ellos, los artículos 34, 28.2, 21.1, numeral 3 del numeral 7.3 del artículo 7, entre otros.

En relación al artículo 35 de la Autógrafa de Ley

Respecto del numeral 35.2 del artículo 35 de la Autógrafa de Ley, es necesario que se justifique en el Dictamen de la Autógrafa de Ley la idoneidad y necesidad de la medida de suprimir la elaboración del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas (IMIAPP), y disponer que mediante Decreto Supremo, con refrendo del Ministerio de Economía y Finanza, se establezca la relación de proyectos priorizados de la Entidades Públicas de Gobierno Nacional que serán desarrollados bajo la modalidad de APPs y PA.

Al respecto, actualmente es competencia de los Ministerios aprobar el Programa Multianual de Inversiones (PMI) que contiene los indicadores, brechas, el diagnóstico de brechas y los criterios para la priorización de las inversiones, así como, la cartera de inversiones del Sector, e incluye, entre otros, el cofinanciamiento estimado para los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante APPs cofinanciadas. Y el IMIAPP debe materializa la planificación de los proyectos y de los compromisos, firmes o contingentes, correspondientes a APPs, con concordancia con la Programación Multianual de Inversiones.

En ese sentido, la medida de la Autógrafa de Ley, de suprimir la elaboración IMIAPP para proyectos del gobierno nacional, desarticula la relación entre el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y el Sistema Nacional de Promoción de Inversión Privada, y no queda claro, como el Decreto Supremo que establezca la relación de proyectos priorizados de la Entidades Públicas de Gobierno Nacional, debe estar alineado al PMI.

4. En adición a lo expuesto debemos señalar lo siguiente:

Sobre la necesidad de contar con mejoras en la gobernanza institucional para todos los proyectos de inversión bajo la modalidad de asociación público privada

Sobre el particular, el Decreto Legislativo N° 1543, Decreto Legislativo que dicta medidas para mejorar la gestión de proyectos y los procesos de promoción de la inversión privada, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de marzo de 2022, modificado posteriormente mediante Decreto Legislativo N° 1691, constituyó una normativa promovida por el MEF para mejorar la gobernanza de los proyectos de inversión bajo la modalidad de asociación público privada.

A través de dicha normativa se estableció que las entidades públicas titulares de proyectos encargadas de administrar un proyecto o una cartera bajo la modalidad de Asociación Público Privada, cuyo costo total de inversión acumulado sea igual o superior a las trescientas mil (300,000) UIT deben implementar la creación de un Órgano Especializado para la Gestión y Ejecución de Proyectos de APP – OEGEP que desarrolle las acciones necesarias para la gestión integral y la adecuada ejecución contractual del proyecto o la cartera de proyectos que le sean asignados, durante todas las fases de los procesos de promoción de la inversión privada, conforme a los presupuestos establecidos en la ley y su reglamento.

Al respecto, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1543 establece lo siguiente:

> *"**Artículo 5. Funciones***
> *5.1 Los Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos, implementados por las entidades públicas titulares de proyectos, desarrollan las acciones necesarias para la gestión integral y la adecuada ejecución contractual del proyecto o la cartera de proyectos que le sean asignados, durante todas las fases reguladas en el Decreto Legislativo N° 1362; incluyendo, sin limitarse, al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la entidad pública titular del proyecto.*

5.2 En adición a lo señalado en el numeral anterior, los Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos ejercen las siguientes funciones:

a. Establecer estructuras de gobernanza para los proyectos que se le asigne, que permitan cómo los proyectos son dirigidos, ejecutados y controlados.

b. Diseñar e implementar mejoras en los procesos e instrumentos para la gestión integrada del proyecto.

c. Participar en todas las fases de la Asociación Público Privada, identificando los problemas y trabas que impidan su avance y realizar las acciones para su solución, en el marco de las competencias de la entidad pública titular del proyecto.

d. Cumplir todas las obligaciones contractuales a cargo de la entidad pública titular del proyecto, incluyendo, sin limitarse, a la gestión de cambios en el alcance de los proyectos.

e. Otras establecidas en el Reglamento.

(...)

(Subrayado agregado)

Sobre el particular, corresponde indicar que, en atención al Decreto Legislativo N° 1543, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicitó al Banco Mundial asistencia técnica no reembolsable para la implementación del Decreto Legislativo N° 1543, confirmando el apoyo solicitado a través del programa de asistencia técnica del área de transporte con recursos de fondos donantes que el Banco Mundial administra.

En atención al compromiso aceptado por el Banco Mundial, el referido organismo internacional expuso el resultado del diagnóstico realizado y la hoja de ruta recomendada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la implementación del órgano especializado de gestión y ejecución de proyectos por parte del Sector Transportes, conforme lo previsto en el Decreto Legislativo N° 1543 y normativa conexa.

De modo que, teniendo en consideración que la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Autógrafa de ley señala que queda derogado el Decreto Legislativo N° 1543, se considera que vulnera las competencias de los titulares de los proyectos de inversión respecto a la búsqueda de mecanismos conducentes para una adecuada gobernanza, conllevando que los proyectos de inversión bajo la modalidad de asociación público privada que se encuentran en la fase de ejecución contractual y que los nuevos proyectos no se encuentren bajo un marco normativo como el previsto en el Decreto Legislativo N° 1543 o uno que permita contribuir con los siguientes aspectos:

- Mejora de las estructuras organizativas y marco de gobernanza de los proyectos.
- Establecimiento de sistemas de información que permitan la entrega de documentos de calidad.
- Establecimiento de estructuras de monitoreo y gestión de riesgos, cronogramas, alcance, partes interesadas y cualquier otro aspecto importante del proyecto.
- Identificación de necesidades de conocimiento y actividades correspondientes para llevar a cabo diversas capacitaciones.
- Incorporación de plataformas tecnológicas que coadyuven con el avance del proyecto, entre otros.

En tal sentido, los proyectos en fase de ejecución contractual que recaen en los diversos ministerios que tienen la titularidad de los precitados proyectos, quedarían desprotegidos, en la medida que la Autógrafa de ley no contempla una salvaguarda para una adecuada gestión, sino solo para los nuevos proyectos y en los que Proinversión ejerza su titularidad, en calidad de Concedente, afectando el cierre de brechas en infraestructuras, debido a un tratamiento inequitativo, careciendo de un sustento técnico.

El numeral 7.1 del artículo 7 de la autógrafa de ley propone que Proinversión asuma el rol de entidad titular de los proyectos APP. Al respecto, si bien Proinversión cuenta con experiencia en las fases iniciales del ciclo de las APP (formulación, estructuración y transacción), no tiene trayectoria en la ejecución contractual, lo cual genera riesgos considerando la alta complejidad técnica de estos proyectos, que actualmente es gestionada por las entidades contratantes competentes, como por ejemplo es el caso del MTC en materia de infraestructura de transporte así como los órganos técnicos que brindan soporte durante la gestión contractual.

Asimismo, la exposición de motivos señala que, culminada la Puesta en Operación Comercial (POC), la titularidad del proyecto sería transferida al ministerio correspondiente; sin embargo, este planteamiento resulta contradictorio con lo dispuesto en la propia autógrafa, la cual establece que Proinversión mantendría la titularidad incluso después de dicha etapa.

Sobre la necesidad de contar con un trato igualitario para la totalidad de titulares de proyectos

La igualdad como derecho implica "una exigencia individualizable que cada persona puede oponer frente al Estado para que este lo respete, proteja o tutele"[2], que es el punto de partida indispensable en todo sistema democrático de derecho, por lo que si los destinatarios de ese sistema jurídico-político no inmiscuyen a todos, sino solo a un grupo "privilegiado" de ellos, el derecho estará tan lejos del ideal de justicia que desde su mismo origen la norma será incapaz de ofrecer un trato justo[3].

Por ende, "el principio de igualdad en el Estado constitucional exige del legislador una vinculación negativa o abstencionista y otra positiva o interventora. La vinculación negativa está referida a la ya consolidada jurisprudencia de este Colegiado respecto de la exigencia de 'tratar igual a los que son iguales' y 'distinto a los que son distintos', de forma tal que la ley, como regla general, tenga una vocación necesaria por la generalidad y la abstracción, quedando proscrita la posibilidad de que el Estado, a través del legislador, pueda ser generador de factores discriminatorios de cualquier índole. En tal sentido, debe reconocerse también una vinculación positiva del legislador a los derechos fundamentales, de forma tal que la ley esté llamada a revertir las condiciones de desigualdad o, lo que es lo mismo, a reponer las condiciones de igualdad de las que la realidad social pudiera estarse desvinculando, en desmedro de las aspiraciones constitucionales"[4].

No obstante lo anterior, resulta admisible realizar diferenciaciones siempre que estas tengan una justificación objetiva y razonable, contrario sensu, se vulnerará el derecho a la igualdad cuando se realice una distinción arbitraria, es decir, que carezca de justificación objetiva y razonable, configurándose así un supuesto de discriminación. En efecto, existen mecanismos constitucionalmente válidos, a través de los cuales se pueden hacer diferencias entre personas o grupos de personas en función a condiciones objetivas que las hacen merecedoras de un tratamiento especial. Es por ello que, no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma, dado que habrá discriminación solo si la distinción de tratamiento no está orientada legítimamente, es decir, si conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas[5].

---

[2] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente N° 00604-2004-AA/TC, del 25 de marzo de 2004

[3] NAGEL, Thomas. Igualdad y parcialidad: bases éticas de la teoría política. Traducido por J.F. Álvarez. Barcelona: Paidós, 1996, p. 67 y ss.

[4] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente N° 0008-2003-AI/TC, fundamento 15.

[5] Corte IDH. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984, párr. 57. En la referida opinión, la Corte IDH señaló que era incompatible con los

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en los Expedientes N° 0025-2013-PI/TC; 0003-2014-PI/TC; 0008-2014-PI/TC; 0017-2014-PI/TC (Caso Ley del Servicio Civil) señaló lo siguiente:

> *"66. […] Si la ley del servicio civil debe ser, en principio, aplicable a todos los servidores públicos, toda exclusión debe estar razonablemente fundada en la especial naturaleza o la particularidad de la prestación del servicio. Sólo [sic] de esta manera estaría justificada la exclusión de un determinado grupo de servidores públicos de los alcances de la ley (…)*
>
> *(…)*
>
> *69. Si el objeto que ha perseguido el legislador es tender a uniformar el régimen de los servidores públicos, las exclusiones que realice deben tener un fundamento en la naturaleza de la función y constituir propiamente una carrera desde la perspectiva de la progresión. La diferencia no puede basarse solamente en la particularidad de la actividad que realizan, por cuanto las funciones de cada órgano del Estado son, de alguna manera, especializadas y diferentes (fundamento 69)".*
>
> *(Subrayado agregado)*

De ahí que no serán inconstitucionales aquellos casos en los que el Estado tenga por objeto asegurar un ejercicio equitativo de los derechos fundamentales a colectivos discriminados o relegados históricamente[6], toda vez que el Estado tiene el deber de promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación, contemplado en el artículo 43 de la Constitución.

Atendiendo a ello, aquellos casos donde existan tratamientos diferenciados que no estén basados en promover la equiparación en derechos de grupos o colectivos históricamente marginados o relegados y, por el contrario, promuevan una diferenciación que puede consolidar las brechas de desigualdad existentes, deben quedar desestimadas aquellas prácticas estatales en la medida que pueden afectar el principio-derecho de igualdad.

Por otro lado, se aprecia que el artículo 20 y la Novena Disposición Complementaria Final de la Autógrafa de ley contemplan lo que se detalla a continuación:

> ***"Artículo 20. Seguros de responsabilidad para funcionarios***
>
> *Proinversión puede contratar seguros de responsabilidad administrativa, civil y/o penal para sus funcionarios y servidores responsables de adoptar decisiones en el marco de los proyectos desarrollados bajo las modalidades reguladas en la presente Ley. Adicionalmente, los funcionarios y servidores pueden adoptar los mecanismos de defensa legal contemplados en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.*
>
> ***"NOVENA. Escala salarial y remuneraciones***
>
> *1. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a aprobar la nueva escala de ingresos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas.*
>
> *2. Para efectos de implementar lo dispuesto en el presente artículo, se exonera a Proinversión de lo establecido en el artículo 6 y en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025 – Ley N° 32185.*

---

artículos 17.4 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecer condiciones preferentes para facilitar que la esposa extranjera de un hombre costarricense adquiriera la nacionalidad sin disponer el mismo beneficio para el esposo extranjero de una mujer costarricense".

[6] UPRIMNY YEPES, Rodrigo y SÁNCHEZ DUQUE, Luz María. "Artículo 24. Igualdad ante la ley". En: STEINER, Christian y URIBE, Patricia (Editores). Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentarios. Bolivia: Konrad Adenauer Stiftung, 2014, p. 581.

3. *La implementación de la presente disposición se financia con cargo a los recursos del Pliego Proinversión de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y de manera progresiva, para lo cual se le autoriza, durante el año fiscal 2025, a realizar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático para financiar la escala que se apruebe en el marco de lo dispuesto en la presente disposición.*
4. *Para efectos de implementar lo dispuesto en la presente disposición, exonérese a Proinversión del tope de ingresos establecido en el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 038-2006.*

(...)

DÉCIMA PRIMERA. Exceptuar a Proinversión del régimen laboral del servicio civil
PROINVERSIÓN se rige por el régimen laboral de la actividad privada y no está comprendido en los alcances del régimen laboral del Servicio Civil, regulado en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

DÉCIMA SEGUNDA. Incorporación excepcional de personal
Autorizar, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2025, a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión, la incorporación de personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad laboral, para este efecto, Proinversión se encuentra exonerado de lo establecido en el numeral 8.1 del artículo 8 y el numeral 8.1 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025 – Ley 32185.

La presente disposición se financia con cargo a los recursos de Proinversión, y de ser el caso con cargo a las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional que se aprueban a favor de dicha entidad en el marco de la Centésima Vigésima Primera Disposición Complementaria Final de la presente Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025 – Ley 32185, pudiendo solicitar la transferencia de dichos recursos para financiar la aplicación de lo establecido en la presente disposición".

De lo expuesto, **se identifica la necesidad de que las medidas implementadas en la autógrafa se encuentren alineadas al principio de igualdad bajo los criterios que ha establecido el supremo intérprete de la Constitución, en la que se identifique la universalidad en los beneficios referentes a los procesos de gestión inmersos en la administración de los proyectos de inversión, bajo la modalidad de asociación público privada, razón por la cual se considera que debe ser observada la Autógrafa de ley**, conforme los presupuestos previstos en la sentencia recaída en el Expediente N° 00029-2018-PI/TC.

Sobre la necesidad de contar con medidas integrales y articuladas para la promoción e implementación de los proyectos de inversión bajo asociación público privada

Si bien se advierte que la Autógrafa de ley, toma en consideración lo previsto en el Decreto Legislativo N° 1362, referente a que los encargos de estudios de ingeniería al inversionista, o de sus respectivas modificaciones, durante la fase de ejecución contractual no se encuentra sujeto al procedimiento de modificación contractual, aspecto que resulta positivo; no obstante, aún se advierten omisiones del marco vigente, aspectos que dificultan el desarrollo de las inversiones, las cuales se detallan a continuación:

a) Sobre modificaciones contractuales

Sobre el particular, resulta oportuno indicar que la Autógrafa de ley no recoge la problemática relacionada con la ausencia de mecanismos ágiles que permitan una intervención inmediata frente a situaciones de emergencia, tales como aquellas originadas por fenómenos naturales o por la dinámica propia de las infraestructuras viales desarrolladas en el marco de los Contratos de APP. En efecto, considerando la amplia extensión territorial de estas infraestructuras y los constantes cambios demográficos y geográficos, así como los cambios climáticos, tales como intensas precipitaciones pluviales ocasionadas por el Fenómeno del

Niño. Por lo expuesto, se torna imprescindible contar con herramientas que viabilicen la adopción de medidas adaptativas, acordes a cada contexto.

En experiencias anteriores, se contemplaron en los mismos contratos herramientas de atención oportuna, como la figura de las "obras accesorias", concebida como un mecanismo contractual que permitía encargar la ejecución de intervenciones puntuales mediante la suscripción de Actas de Acuerdo entre las partes. Este mecanismo, se encuentra previsto en contratos tales como los de concesión de la IIRSA Sur – tramos 2, 3 y 4 – y la IIRSA Norte, lo que ha evidenciado su eficacia en la atención oportuna de contingencias derivadas de la naturaleza cambiante del entorno de los proyectos.

No obstante, producto de modificaciones normativas, actualmente solo se contempla la figura de las "inversiones adicionales", las cuales deben ser tramitadas conforme al procedimiento de modificación contractual previsto en la normativa aplicable. De modo que, ni la regulación vigente ni la Autógrafa de Ley consideran la urgencia ni la naturaleza excepcional de ciertas intervenciones, que por sus características requieren ser ejecutadas en plazos breves. La exigencia de seguir un procedimiento formal y prolongado para su aprobación compromete la capacidad de respuesta del concesionario y de la administración contractual frente a eventos que requieren atención inmediata.

De ahí que, ni la normativa vigente ni la Autógrafa de Ley establecen un mecanismo célere, por el contrario, las partes contractuales quedan supeditadas a que los encargos, aun cuando tengan el carácter de urgencia por la ocurrencia de fenómenos naturales y/o seguridad vial o se busque adoptar medidas preventivas tengan que ser materializados tales encargos a través de adendas. De modo que, el Concedente tenga que promover una modificación contractual y, en consecuencia, transitar por el proceso de evaluación conjunta donde participan diversos actores.

Por tanto, a pesar que entre el Concesionario y el Concedente pueda existir un acuerdo de voluntades sobre la modificación contractual, corresponde que las partes participen en el proceso de evaluación conjunta, el cual no tiene un plazo determinado de culminación, por cuanto la Autógrafa de Ley no establece plazos perentorios ni siquiera en situaciones de emergencia ocasionados por fenómenos naturales y/o de seguridad vial.

Ante ello, resulta oportuno indicar que, en los últimos años, por ejemplo, en el Contrato de Concesión para la Construcción y Explotación del Tramo Vial Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica de la Carretera Panamericana Sur – R01S, han existido una serie de comunicaciones provenientes de municipalidades, congresistas, juntas directivas de centros poblados y de la Presidencia del Consejo de Ministros, requiriendo la necesidad y urgencia de construcción de distintas obras, las cuales tienen como factor común la reducción de accidentes de tránsito y la articulación de la autopista con los centros poblados aledaños.

Sobre la base del ejemplo señalado previamente, para que el Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica pueda ser operado de manera óptima, se requiere de infraestructura complementaria no prevista como parte del compromiso de inversión del Concesionario que permita que las vías locales se adecúen y desarrollen de manera armónica un sistema vial de manera integral, en beneficio de la ciudadanía.

En ese sentido, el Concedente debe transitar por un procedimiento legal laxo para el encargo de ejecución de obras[7], por cuanto no existe un mecanismo legal célere en el que el Concedente se encuentre autorizado a encargar al Concesionario dicha actividad, con la

[7] Con excepción del Contrato Red Vial N° 5: Ancón – Huacho – Pativilca.

finalidad que se pueda mitigar, a corto plazo, el impacto sobre la no ejecución de obras, complementarias, nuevas, adicionales, accesorias, conforme lo estipulado en los contratos de asociación público privada, ante situaciones de emergencia, ocasionadas por fenómenos naturales y de seguridad vial, poniendo en riesgo la vida y la salud de los usuarios de la Red Vial Nacional concesionada, teniendo en consideración la ubicación geográfica del Perú y la frecuente ocurrencia de fenómenos naturales, como precipitaciones pluviales, así como los elevados índices de siniestralidad en la Red Vial Nacional, debido a la falta de ordenamiento territorial.

En ese sentido, lo señalado ha conllevado a que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), haya tenido que recurrir a mecanismos excepcionales, como Decretos de Urgencia[8], los cuales, además de requerir la articulación multisectorial para su aprobación y ejecución, constituyen medidas de carácter reactivo, más no preventivo. La circunstancia descrita previamente evidencia la falta de herramientas contractuales eficaces dentro del marco de los Contratos de Asociación Público-Privada que permitan anticiparse y responder oportunamente a las contingencias señaladas, en lugar de depender de mecanismos extraordinarios, cuya activación resulta tardía frente a la urgencia de la problemática.

De ahí que, resulta necesario que cualquier propuesta de mejora normativa en el régimen aplicable a las APP incluya disposiciones específicas que habiliten mecanismos flexibles y expeditivos de intervención, a fin de garantizar una gestión contractual eficaz que permita mitigar impactos negativos futuros derivados de la inacción o de la demora en la atención de contingencias, aspectos que no se desprenden de la Autógrafa de ley.

Ante ello, se propone el siguiente texto para una nueva regulación de los proyectos de asociación público privada:

> *"**Artículo 59. Modificaciones contractuales***
> *(...)*
> *59.12 En caso de ocurrencia de fenómenos naturales o por acciones de prevención y en aquellas zonas donde sean necesarias para resguardar la vida, por temas de seguridad de los usuarios, que requiera al Concedente realizar inversiones adicionales para obras complementarias, nuevas, adicionales, accesorias, en los contratos de asociación público privada en infraestructura de transportes, las partes, por mutuo acuerdo, podrán suscribir acta(s) para encargar la ejecución de obra, con cargo al presupuesto institucional del titular de los proyectos.*
> *59.13 La suscripción de acta(s) de acuerdo prevista para los supuestos señalados en el numeral 59.12 no requiere seguir el procedimiento de modificación contractual previsto en la presente disposición."*

b) Sobre la liberación de predios

La liberación de predios es uno de los aspectos críticos y sensibles en la ejecución de proyectos

[8] Decreto de Urgencia N° 011-2023, Decreto de Urgencia que aprueba medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera ante emergencias por impacto de daños o desastre por la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales o peligros asociados en el 2023, publicado el 22 de abril de 2023 en el diario oficial El Peruano.
Decretos de Urgencia N° 009-2024, Decreto de Urgencia que aprueba medidas extraordinarias en materia económica y financiera para dinamizar e impulsar la ejecución de proyectos de inversión en transportes, publicado el 19 de mayo de 2024 en el diario oficial El Peruano.
Decreto de Urgencia N° 001-2025, Decreto de Urgencia que aprueba medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera por afectación a la infraestructura de puentes ubicados en las redes viales que forman parte del Sistema Nacional de Carreteras, por intensas precipitaciones pluviales o peligros asociados, publicado el 13 de marzo de 2024 en el diario oficial El Peruano.

de infraestructura bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP). Al respecto, el Decreto Legislativo N.º 1192, que regula el proceso de adquisición y expropiación de inmuebles contempla un procedimiento formalista, fragmentado y de plazos extensos, lo que lo convierte en un mecanismo rígido y poco operativo, especialmente en proyectos de gran envergadura y alta sensibilidad social como los vinculados a infraestructura de transporte.

Dicho contexto, afecta gravemente la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones imprevistas, obstáculos administrativos o judiciales y negociaciones con titulares o poseedores de inmuebles. En otras palabras, la falta de flexibilidad y eficiencia en este proceso entorpece la ejecución de los proyectos y desincentiva la participación privada, toda vez que aumenta la incertidumbre legal y financiera.

Como se mencionó previamente, a través del numeral 15.5 del artículo 15 de la Autógrafa de ley se otorga a Proinversión competencias como entidad pública titular del proyecto y como sujeto activo para ejecutar metas de adquisición o expropiación de predios, genera incongruencia normativa, vulneración del marco legal vigente y exclusión del principio de coordinación sectorial.

Sin embargo, se identifica que los problemas sobre este punto requieren una solución de fondo que no es abordada en la autógrafa, por lo que se deben desplegar los esfuerzos para realizar una reforma al Decreto Legislativo N° 1192 que brinde atención integral y sirva de instrumento para los titulares de proyecto en su conjunto.

c) Sobre el retiro de interferencias

El retiro de interferencias se vincula directamente con las obligaciones contractuales del concedente, cuya inobservancia puede acarrear retrasos sustanciales, controversias contractuales y potenciales procesos arbitrales.

Como órgano rector en infraestructura de transporte a nivel nacional, el MTC cuenta con experiencia técnica acumulada para gestionar el retiro de interferencias a través de sus órganos especializados. Sin embargo, la Autógrafa de Ley no ofrece alternativas frente situaciones prácticas que han demostrado requerir soluciones excepcionales y flexibles, tales como, la coordinación intersectorial para la reubicación de redes, solución de conflictos con empresas prestadoras de servicios públicos, así como la aprobación de expedientes técnicos específicos para el retiro y reposición de servicios afectados.

En ese sentido, resulta necesario contar con disposiciones expresas que habiliten mecanismos ágiles, técnicos y articulados para el retiro de interferencias, considerando la designación clara del órgano competente. La posibilidad de aplicar procedimientos simplificados, fortalecer la rectoría sectorial y la incorporación de mecanismos de financiamiento anticipado o reembolsable.

d) Sobre los procedimientos deficientes que obstaculizan el desarrollo de la inversión privada

El exceso de requisitos administrativos o "permisología" constituyen una barrera burocrática que afecta directamente la inversión privada, en particular aquella desarrollada bajo el marco de los contratos de Asociación Público-Privada (APP), ocasionando entre otros, los siguientes impactos negativos:

- **Retrasos significativos en la ejecución de obras**, con impacto directo sobre los cronogramas contractuales y sobre la entrega de infraestructura pública vital.

- **Aumento en los costos operativos y financieros** debido a la paralización o suspensión de obras por falta de permisos exigidos de forma indebida.

- **Incertidumbre jurídica**, lo cual disminuye la predictibilidad del entorno regulatorio, desincentivando la participación de inversionistas en futuros procesos de APP.

- **Pérdida de beneficios para la ciudadanía**, dado que se demora el acceso a servicios públicos esenciales como el transporte masivo.

En suma, la imposición de permisos injustificados y/o engorrosos erosiona la confianza de los agentes privados en el sistema jurídico y administrativo nacional, afectando la competitividad del país y la concreción de proyectos estratégicos.

Sobre el particular, si bien en la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley 31955, se ha otorgado una exoneración expresa de dichos permisos y/o autorizaciones municipales para el desarrollo de los proyectos priorizados incorporados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC), resulta necesario que dicha exoneración se haga extensiva a todos los proyectos implementados a través de asociaciones público privadas con la finalidad de evitar los impactos negativos antes expuestos que terminan deviniendo en una pérdida de credibilidad en el mecanismo.

Por otro lado, la Autógrafa de Ley no contempla un mecanismo que permita que el Estado pueda conciliar el interés en preservar el patrimonio cultural, sin que ello limite el desarrollo de los proyectos de inversión, bajo la modalidad de asociación público privada, en aras de fomentar la conectividad en el país a través del cierre de brechas de infraestructura y, asimismo, que el Estado adopte acciones de preservación del patrimonio cultural, buscando una armonía entre la demanda de la ciudadanía, el crecimiento demográfico, la protección de nuestra identidad cultural y la promoción de la inversión privada.

En tal sentido, la Autógrafa de Ley no contempla una regulación holística que atienda las diversas problemáticas, tales como superar los procedimientos administrativos deficientes que contribuiría con decisiones predecibles por parte de las diversas entidades inmersas para el desarrollo de los proyectos de inversión de asociación público privada, no aportando soluciones sobre los temas de fondo previamente señalados que permita un cambio sustancial y trascendental para el desarrollo y promoción de las inversiones.

En esa línea, se recomienda que la Autógrafa de Ley contemple como Vigésima Disposición Complementaria Final la siguiente:

> ***"DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL***
> *(...)*
> ***Vigésima. Aprobación automática para la obtención de autorización y/o permisos para la ejecución de proyectos de inversión bajo la modalidad de asociación público privada***
> *1. Se dispone la aprobación automática de todos los permisos y/o autorizaciones municipales y otras que correspondan para el desarrollo de los proyectos de inversión bajo la modalidad de asociación público privada.*
> *2. Para efectos informativos, los concesionarios comunicarán el cronograma y/o plan de desvíos respectivo a los gobiernos locales.*
> *3. En caso corresponda, los concesionarios deben efectuar las mejoras necesarias.*
> *4. Corresponderá a las entidades supervisoras y fiscalizadoras u organismos reguladores la verificación y supervisión del cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y/o técnicas por parte de los concesionarios, en el marco de sus competencias".*

Asimismo, teniendo en consideración que la ejecución de un proyecto de inversión bajo la modalidad de APP puede generar impactos, se recomienda la creación de un fondo de remediación, como parte del desarrollo del principio de sostenibilidad que corresponde al Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada bajo APP. En ese sentido, se recomienda la siguiente redacción:

> *"**Artículo 58. Fideicomiso***
> *(...)*
> *58.5 Los nuevos contratos deben incluir un Fondo de Remediación, a través de la creación de una cuenta de fideicomiso, que permita afrontar, en forma oportuna, los impactos producidos ante la ocurrencia de eventos contingentes. El Fondo de Remediación está destinado para cada proyecto y otros en operación, según corresponda. Los supuestos de eventos contingentes serán determinados mediante lineamientos por el titular de los proyectos."*

Sobre la vulneración del derecho constitucional de la libertad de contratar

El contrato de asociación público privada es el documento que regula la ejecución del proyecto de inversión entre el Estado y el inversionista privado, estableciendo entre las partes, los derechos y las obligaciones respectivas, el régimen de los bienes del proyecto, su estructura económico-financiera, la asignación de riesgos entre estas, las garantías para el proyecto, los incumplimientos por desempeño, las reglas de suspensión de obligaciones, la solución de controversias y la terminación del contrato, entre otros aspectos de importancia, a fin de brindar un servicio público de la manera más eficiente posible.

En ese sentido, el Estado es responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los contratos de asociación público privada y, asimismo, velar por el mantenimiento del adecuado equilibrio económico financiero y las condiciones de competencia del proceso de promoción, procurando la no alteración de la asignación de riesgos y la naturaleza del proyecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, el cual prevé que: "La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley".

Al respecto, cabe indicar que conforme se desprende de los contratos de asociación público privada en infraestructura de transportes, la ejecución contractual debe ser efectuada conforme a los acuerdos adoptados entre el Concedente y los Concesionarios, en el marco del artículo 62 de la Constitución Política del Perú.

En esa línea, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido clara y reiterada en reconocer que cualquier acto normativo que implique la modificación unilateral de los términos contractuales acordados entre particulares y el Estado constituye una vulneración directa al principio de seguridad jurídica. En la sentencia recaída en el Exp. N° 00006-2020-PI/TC, el Tribunal Constitucional ratificó que el contenido esencial del derecho a la libertad de contratar incluye la protección de los contratos frente a actos normativos que pretendan alterarlos sin consentimiento de las partes ni procedimiento establecido.

Asimismo, la doctrina constitucional peruana ha señalado que los contratos administrativos, tales como los de Asociación Público Privada (APP), si bien están sometidos a un régimen especial por su vinculación con el interés público, no pierden la protección del derecho

fundamental a la libertad contractual. En este sentido, la modificación unilateral de elementos estructurales del contrato, como la titularidad del concedente, sin el consentimiento expreso de las partes a través de una adenda válida, constituye una afectación arbitraria al contenido esencial del contrato.

En esa línea, toda aquella propuesta normativa que no respete el derecho a la libertad contractual, debe quedar observada por el hecho que la Constitución Política del Perú y las disposiciones de desarrollo constitucional recaídas en la normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada garantizan la seguridad jurídica de los acuerdos contractuales adoptados entre las partes.

Teniendo en consideración lo previamente mencionado, resulta oportuno analizar las siguientes Disposiciones Complementarias Finales contempladas en la Autógrafa de Ley:

> ***"SEXTA. Transferencia de acervo documentario, bienes y personal***
> *En el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles posteriores a la publicación de la presente Ley, los Ministerios, transfieren a Proinversión el acervo documentario, bienes muebles e inmuebles, obligaciones, contratos y recursos, vinculados con su ejercicio como entidad pública titular de proyecto. La transferencia patrimonial y asunción de derechos y obligaciones por parte de Proinversión operan dentro del plazo referido.*
> *En el mismo plazo, el Ministerio de Economía y Finanzas realiza la transferencia del acervo documentario, vinculada a su ejercicio anterior como ente rector del SNPIP.*
> *(...)*
>
> ***DÉCIMA SÉTIMA. Reglas adicionales de Titularidad de Proyectos***
> *Proinversión, con excepción de los proyectos de electricidad, asume el rol de entidad pública titular del proyecto de los contratos de APP suscritos dentro de los doce (12) meses previos a la promulgación de la presente Ley, que tengan un Costo Total de Inversión superior a las 80 mil (80,000) UIT. Para tal efecto, Proinversión y los inversionistas de los respectivos contratos de APP, adoptan los actos de ejecución contractual necesarios para implementar la presente disposición, sin que sea necesario la suscripción de adendas para la modificación contractual.*
>
> *El Estado Peruano ratifica las seguridades y garantías otorgadas en el marco de los respectivos contratos de APP, así como la validez de los convenios de estabilidad jurídica suscritos al amparo de la normativa vigente y demás derechos adquiridos a la fecha. Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente Ley, a solicitud del inversionista, se emiten los actos necesarios para dar cumplimiento a la presente disposición.*
>
> *Proinversión hace efectivo la función de asumir el rol de entidad pública titular del proyecto al día siguiente de la entrada en vigencia del Reglamento de la presente Ley".*

En atención a la precitada regulación contemplada en la Autógrafa de Ley, los contratos de APP suscritos dentro de los doce (12) meses previos a la promulgación del texto aprobado por el Pleno del Congreso de la República, que tengan un Costo Total de Inversión superior a los 80 mil (80 000) UIT, se considera que el MTC mantenga su calidad de Concedente, toda vez que resulta ser la entidad altamente especializada en infraestructura de transportes.

Ante dicho panorama, se debe tener presente que deben cumplirse las obligaciones contractuales correspondientes, conforme el artículo 62 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, la redacción contemplada en la Décima Sétima Disposición Complementaria

Final de la Autógrafa de Ley podría ocasionar que, la transferencia de funciones del MTC a Proinversión, el Concedente pueda incumplir con sus obligaciones contractuales, lo que podría devenir en el inicio de un trato directo por parte de las empresas Concesionarias, lo que, posteriormente, podría acarrear la presentación de una demanda arbitral que resulte lesiva para el Estado peruano, por cuanto podría traducirse en una indemnización cuantiosa a favor de los Concesionarios.

Asimismo, resulta sumamente trascendente resaltar que un contrato de asociación público privada no se modifica por la sola vigencia de una disposición, aun cuando ella sea de rango legal. En tal sentido, la Autógrafa de ley vulnera el artículo 62 de la Constitución Política del Perú que reconoce el derecho a la libertad de contratar, toda vez que los contratos no pueden ser modificados legislativamente o unilateralmente por el Estado para otorgar garantías y seguridades, a fin de brindar estabilidad jurídica a los inversionistas.

Por lo antes señalado, no resulta constitucionalmente viable que el cambio de titularidad de los proyectos con los presupuestos previstos en la Décima Sétima Disposición Complementaria Final de la Autógrafa de ley quede exceptuado de un mecanismo que decidan las partes, teniendo en consideración los posibles riesgos que se detallan a continuación, respecto al Contrato Anillo Vial Periférico:

- El traspaso a PROINVERSIÓN implicaría una inevitable etapa de transición administrativa y técnica, durante la cual podrían suspenderse o retrasarse las actividades a cargo del concedente. Esto no solo afectaría el cronograma de ejecución, sino que habilitaría al concesionario a activar cláusulas como:

- Suspensión de obligaciones del concedente, afectando los flujos financieros.
- Solicitudes de reequilibrio económico-financiero por cambio normativo o modificación de condiciones contractuales.

Teniendo en consideración lo señalado previamente, se recomienda como Décimo Sétima Disposición Complementaria Final la siguiente redacción:

> ***DÉCIMA SÉTIMA. Reglas adicionales de Titularidad de Proyectos***
> *Proinversión, con excepción de los proyectos del sector electricidad, asume el rol de entidad pública titular del proyecto de los contratos de APP suscritos dentro de los doce (12) meses previos a la promulgación de la presente Ley, que tengan un Costo Total de Inversión superior a las 80 mil (80,000) UIT. Para tal efecto, Proinversión y los inversionistas de los respectivos contratos de APP, adoptan los actos de ejecución contractual necesarios para implementar la presente disposición, sin que sea necesario la suscripción de adendas para la modificación contractual.* ***Asimismo, las Partes implementan los mecanismos contractuales para la suspensión de las obligaciones que correspondan.***
> *El Estado Peruano ratifica las seguridades y garantías otorgadas en el marco de los respectivos contratos de APP, así como la validez de los convenios de estabilidad jurídica suscritos al amparo de la normativa vigente y demás derechos adquiridos a la fecha. Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente Ley, a solicitud del inversionista, se emiten los actos necesarios para dar cumplimiento a la presente disposición.*
> *Proinversión hace efectivo la función de asumir el rol de entidad pública titular del proyecto al día siguiente de la entrada en vigencia del Reglamento de la presente Ley.*

Por otro lado, se aprecia que la Décima Octava Disposición Complementaria Final de la Autógrafa de Ley contempla la creación del Fondo para la administración de la retribución de contratos de infraestructura de transporte (FONRECIT), cuyos recursos provendrán de las retribuciones efectuadas por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Contrato de Concesión del Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica (Red Vial 6). Al respecto, se considera oportuno precisar que, sobre este extremo, el referido fondo solo podría ser usado para el Contrato del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia, el Contrato del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia y el Contrato de Concesión del Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica, en atención al respeto de los acuerdos adoptados, en el marco del artículo 62 de la Constitución Política del Perú.

En ese sentido, el referido fondo no podría ser usado para otros fines como el que se contempla en la Autógrafa de ley referente a que el referido fondo permita asegurar la disponibilidad de los recursos de los proyectos de competencia de Proinversión en su rol de entidad titular de los proyectos.

En esa línea, teniendo en consideración lo expuesto, se advierte el desconocimiento del reconocimiento del derecho de libertad de contratar atribuido a las partes contractuales, conforme emana de la Constitución Política del Perú, en consecuencia, se considera que la Autógrafa de Ley vulnera el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, de ahí que resulta recomendable que sea observada.

En esa línea, se recomienda Décimo Octava Disposición Complementaria Final la siguiente redacción:

> ***DÉCIMA OCTAVA. Fondo para la administración de la retribución de contratos de infraestructura de transporte***
> *Se crea el Fondo para la administración de la retribución de contratos de concesión de infraestructura de transporte (FONRECIT) que permita el uso y disposición a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de los recursos pagados por los concesionarios del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez" y del Contrato de Concesión del Tramo Vial Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica (Red Vial 6), para el desarrollo de inversiones de infraestructura de transporte y/o actividades, en el marco de lo establecido en los precitados contratos.*
> *El FONRECIT tiene carácter intangible y se financiará con los montos pagados por los concesionarios por concepto de retribución conforme a lo previsto en los respectivos contratos de fideicomiso de cada concesión. El MTC será el encargado de administrar el FONRECIT. Los recursos que constituyen este Fondo no son considerados fondos públicos".*

Sobre la necesidad de emisión de un decreto supremo para materializar la transferencia de proyectos

Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde precisar que el cumplimiento de lo dispuesto en la Décima Sétima Disposición Complementaria Final no releva a las entidades públicas del cumplimiento de otras exigencias normativas complementarias previstas en el ordenamiento jurídico vigente.

En efecto, conforme a lo establecido en el numeral 22.5 del artículo 22 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el redimensionamiento y la reorganización de los ministerios debe realizarse necesariamente mediante decreto supremo. Esta disposición se enmarca dentro de los principios de legalidad, jerarquía normativa y competencia, reconocidos en los artículos 51 y 118 inciso 8 de la Constitución Política del Perú.

Asimismo, esta exigencia normativa tiene como finalidad garantizar que los procesos de reestructuración institucional se efectúen con plena observancia del marco legal, salvaguardando la seguridad jurídica, la estabilidad de la administración pública y el respeto a las competencias establecidas por ley. Por tanto, cualquier disposición normativa que conlleve un reordenamiento a nivel gubernamental que no conlleve a la emisión de un decreto supremo carecería de validez jurídica y podría devenir en nula de pleno derecho.

En atención a lo expuesto, se considera que la Autógrafa de Ley, de igual modo, debe ser observada teniendo en consideración que toda propuesta de regulación debe responder al respeto del principio de concordancia y coherencia normativa que emana de un Estado Constitucional de Derecho. En ese sentido, adicionalmente, a las consideraciones previamente expuestas, ameritaría la necesidad de emisión de un decreto supremo para materializar la transferencia de proyectos.

Sobre el mecanismo de aprobación del listado de proyectos priorizados

De acuerdo con la normativa vigente resulta oportuno indicar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ejerce la calidad de Concedente de proyectos de inversión bajo la modalidad de asociación público privada en infraestructura de transportes desde el año 1999, es decir, desde hace más de veinticinco (25) años, contando con el equipo técnico especializado.

Por ende, en el caso concreto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el ejercicio de su competencia exclusiva en infraestructura de transportes de alcance nacional, se encuentra amparada en los artículos 4 y 6 de la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como en el artículo 11 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, disposiciones normativas que no han sido modificadas por la Autógrafa de ley; y, en consecuencia, se encuentran vigentes.

En atención a lo expuesto, se considera sumamente trascendente señalar que, a efectos de garantizar el respeto de las competencias de los diversos ministerios, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los Ministerios ejercen sus competencias exclusivas en todo el territorio nacional con arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normatividad específica, quienes se encuentran sujetos a las políticas nacionales y sectoriales correspondientes.

Como consecuencia de lo expresado, se considera que la Autógrafa de Ley no se encuentra en concordancia con las funciones previstas en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, asimismo, desconoce las funciones exclusivas reconocidas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

Con relación a este tópico, corresponde indicar que el artículo 35 de la Autógrafa de Ley contempla que la relación de los proyectos priorizados de APP a cargo de Proinversión, en la fase de planeamiento y programación, se verían materializados mediante decreto supremo. Sobre el particular, se considera que la Autógrafa de Ley omite el reconocimiento de las competencias sectoriales asignadas mediante sus leyes de organización.

En ese sentido, se considera que la decisión sobre la relación de proyectos priorizados que sean desarrollados como APP debe contar con la opinión vinculante del Sector correspondiente, a efectos que el Ministerio de Economía y Finanzas promueva la aprobación del decreto supremo correspondiente. Por lo expuesto, se considera que la Autógrafa de Ley debe ser observada.

Propuestas de textos para incluir y sustituir algunos artículos de la Autógrafa de Ley

Atendiendo a lo expuesto y con la finalidad de promover de manera más eficiente la inversión privada mediante asociaciones público privadas, detallaremos a continuación artículos y disposiciones que deben ser incluidos y otros modificados en la Autógrafa de Ley[9]:

Artículos y disposiciones a ser incluidos en la Autógrafa de Ley

No contemplados en la Autógrafa de Ley	***Propuesta:***
No se advierte temática relacionada a procedimientos más expeditivos acorde con la dinámica de los proyectos de APP.	***DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL*** *(…)* ***"Vigésima. Aprobación automática para la obtención de autorización y/o permisos para la ejecución de proyectos de inversión bajo la modalidad de asociación público privada*** *1. Se dispone la aprobación automática de todos los permisos y/o autorizaciones municipales y otras que correspondan para el desarrollo de los proyectos de inversión bajo la modalidad de asociación público privada.* *2. Para efectos informativos, los concesionarios comunicarán el cronograma y/o plan de desvíos respectivo a los gobiernos locales.* *3. En caso corresponda, los concesionarios deben efectuar las mejoras necesarias.* *4. Corresponderá a las entidades supervisoras y fiscalizadoras u organismos reguladores la verificación y supervisión del cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y/o técnicas por parte de los concesionarios, en el marco de sus competencias".*

9 Se están considerando en los cuadros los artículos y disposiciones mencionados precedentemente.

No se advierte temática relacionada al patrimonio cultural.	***Disposición Complementaria Modificatoria:*** ***Modificación del numeral 30.5 del artículo 30 de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación*** *Modifícase el numeral 30.5 del artículo 30 de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, en los siguientes términos:* ***"Artículo 30. Concesiones*** *(...)* *30.5 Todas las obras que sean necesarias de ejecutar dentro del derecho de vía de una infraestructura preexistente, desarrolladas en áreas colindantes o al interior de áreas inscritas en la Lista del Patrimonio Cultural de la Nación y/o Patrimonio Mundial de la UNESCO, no serán consideradas como nueva infraestructura, sino como parte de la infraestructura preexistente".*
No se advierte temática relacionada a la constitución de un fondo de remediación como desarrollo del principio de sostenibilidad de los proyectos de asociación público privado.	***Artículo 58. Fideicomiso*** ***(...)*** *58.5 Los nuevos contratos deben incluir un Fondo de Remediación, a través de la creación de una cuenta de fideicomiso, que permita afrontar, en forma oportuna, los impactos producidos ante la ocurrencia de eventos contingentes. El Fondo de Remediación está destinado para cada proyecto y otros en operación, según corresponda. Los supuestos de eventos contingentes serán determinados mediante lineamientos por el titular de los proyectos.*
No se advierte una medida excepcional que permita salvaguardar la seguridad de los usuarios, ante la ocurrencia de fenómenos naturales o medidas de prevención de ello.	***"Artículo 59. Modificaciones contractuales*** *(...)* *59.12 En caso de ocurrencia de fenómenos naturales o por acciones de prevención y en aquellas zonas donde sean necesarias para resguardar la vida, por temas de seguridad de los usuarios, que requiera al Concedente realizar inversiones adicionales para obras complementarias, nuevas, adicionales, accesorias, en los contratos de asociación público privada en infraestructura de transportes, las partes, por mutuo acuerdo, podrán suscribir acta(s) para encargar la ejecución de obra, con cargo al presupuesto institucional del titular de los proyectos.* *59.13 La suscripción de acta(s) de acuerdo prevista para los supuestos señalados en el numeral 59.12 no requiere seguir el procedimiento de modificación contractual previsto en la presente disposición.*

Artículos y disposiciones a ser sustituidos en la Autógrafa de Ley

Dice:	*Propuesta:*
Artículo 5. Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada *(...)* *5.3. La política nacional del (...). El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba la política nacional del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.*	***Artículo 5. Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada*** *(...)* *5.3. La política nacional (...). El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba la política nacional del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada* ***en coordinación con los entes rectores de cada sector.***
Artículo 7. Entidades públicas titulares de proyectos *(...)* *7.2 Para el caso de Proinversión, como Entidad pública titular del proyecto ejerce, además, las siguientes funciones:* *(...).*	***Artículo 7. Entidades públicas titulares de proyectos*** ***(...)*** ***7.2 Para el caso de Proinversión, el ente rector del sector respectivo emitirá un Decreto Supremo señalando el proyecto a ejecutarse bajo la modalidad de Asociación Público Privada y designando a Proinversión como Entidad Pública Titular del Proyecto. De no emitirse el referido Decreto Supremo, Proinversión cumplirá el rol de Organismo Promotor de la Inversión Privada respecto del proyecto a ejecutarse bajo la modalidad de Asociación Público Privada y tiene las siguientes funciones:*** ***(...)".***
Artículo 20. Seguros de responsabilidad para funcionarios *Proinversión puede contratar seguros de responsabilidad administrativa, civil y/o penal para sus funcionarios y servidores responsables de adoptar decisiones en el marco de los proyectos desarrollados bajo las modalidades reguladas en la presente Ley. Adicionalmente, los funcionarios y servidores puede adoptar los mecanismos de defensa legal contemplados en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.*	***Artículo 20. Seguros de responsabilidad para funcionarios*** ***Los titulares de los proyectos de inversión bajo la modalidad de asociación público privada pueden*** *contratar seguros de responsabilidad administrativa, civil y/o penal para sus funcionarios y servidores responsables de adoptar decisiones en el marco de los proyectos desarrollados bajo las modalidades reguladas en la presente Ley. Adicionalmente, los funcionarios y servidores puede adoptar los mecanismos de defensa legal contemplados en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.*

Artículo 35. Fase de Planeamiento y Programación *(...)* *35.2 Dicha planificación se articula con la Programación Multianual de Inversiones y se materializa en el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas. El Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas incluye los proyectos a ejecutarse mediante las modalidades de Asociación Público Privada y de Proyectos en Activos. Para el caso de los proyectos de Asociación Pública Privada a cargo de PROINVERSIÓN, se materializa mediante decreto supremo que aprueba la relación de proyectos priorizados de las Entidades Públicas de Gobierno Nacional que serán desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada.*	***Artículo 35. Fase de Planeamiento y Programación*** *(...)* *35.2 Dicha planificación se articula con la Programación Multianual de Inversiones y se materializa en el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas. El Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas incluye los proyectos a ejecutarse mediante las modalidades de Asociación Público Privada y de Proyectos en Activos. Para el caso de los proyectos de Asociación Pública Privada a cargo de PROINVERSIÓN, se materializa mediante decreto supremo que aprueba la relación de proyectos priorizados de las Entidades Públicas de Gobierno Nacional que serán desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada.* ***Previamente a la emisión del decreto supremo, se debe contar con la opinión previa favorable del Sector correspondiente, acorde con el tipo de infraestructura que promueva el proyecto.***

DÉCIMA OCTAVA. Fondo para la administración de la retribución de contratos de infraestructura de transporte *Se crea el Fondo para la administración de la retribución de contratos de concesión de infraestructura de transporte (FONRECIT) que permita el uso y disposición a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de los recursos pagados por los concesionarios del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez" y del Contrato de Concesión del Tramo Vial Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica (Red Vial 6), para el desarrollo de inversiones de infraestructura de transporte y/o actividades, en el marco de lo establecido en los referidos contratos.* *El FONRECIT tiene carácter intangible y se financiará con los montos pagados por los concesionarios por concepto de retribución conforme a lo previsto en los respectivos contratos de fideicomiso de cada concesión. El MTC será el encargado de administrar el FONRECIT. Los recursos que constituyen este Fondo no son considerados fondos públicos.* *Mediante decreto supremo, el MTC emitirá las disposiciones reglamentarias aplicables al FONRECIT en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente norma. Las disposiciones deberán incluir las reglas y procedimientos para asegurar la disponibilidad de los recursos de los proyectos de competencia de Proinversión en su rol de EPTP.* *El MTC queda facultado para la aprobación de los procedimientos que resulten necesarios para la correcta administración del Fondo.* *La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación del decreto supremo emitido por el MTC.*	***DÉCIMA OCTAVA. Fondo para la administración de la retribución de contratos de infraestructura de transporte*** *Se crea el Fondo para la administración de la retribución de contratos de concesión de infraestructura de transporte (FONRECIT) que permita el uso y disposición a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de los recursos pagados por los concesionarios del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez" y del Contrato de Concesión del Tramo Vial Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica (Red Vial 6), para el desarrollo de inversiones de infraestructura de transporte y/o actividades, en el marco de lo establecido en los precitados contratos.* *El FONRECIT tiene carácter intangible y se financiará con los montos pagados por los concesionarios por concepto de retribución conforme a lo previsto en los respectivos contratos de fideicomiso de cada concesión. El MTC será el encargado de administrar el FONRECIT. Los recursos que constituyen este Fondo no son considerados fondos públicos".*

NOVENA. Escala salarial y remuneraciones 1. *Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a aprobar la nueva escala de ingresos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas.* 2. *Para efectos de implementar lo dispuesto en el presente artículo, se exonera a Proinversión de lo establecido en el artículo 6 y en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025 – Ley N° 32185.* 3. *La implementación de la presente disposición se financia con cargo a los recursos del Pliego Proinversión de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y de manera progresiva, para lo cual se le autoriza, durante el año fiscal 2025, a realizar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático para financiar la escala que se apruebe en el marco de lo dispuesto en la presente disposición.* 4. *Para efectos de implementar lo dispuesto en la presente disposición, exonérese a Proinversión del tope de ingresos establecido en el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 038-2006.* *(...)* ***DÉCIMA PRIMERA. Exceptuar a Proinversión del régimen laboral del servicio civil*** *PROINVERSIÓN se rige por el régimen laboral de la actividad privada y no está comprendido en los alcances del régimen laboral del Servicio Civil, regulado en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.* ***DÉCIMA SEGUNDA. Incorporación excepcional de personal*** *Autorizar, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2025, a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión, la incorporación de personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad laboral, para este efecto, Proinversión se encuentra exonerado de lo establecido en el numeral 8.1 del artículo 8 y el numeral 8.1 del artículo 9 de*	***NOVENA. Escala salarial y remuneraciones*** 1. *Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a aprobar la nueva escala de ingresos de* ***los titulares de los proyectos de inversión en la modalidad de asociación público privada****, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas.* 2. *Para efectos de implementar lo dispuesto en el presente artículo, se exonera a* ***los titulares de los proyectos de inversión en la modalidad de asociación público privada*** *de lo establecido en el artículo 6 y en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025 – Ley N° 32185.* 3. *La implementación de la presente disposición se financia con cargo a los recursos del Pliego de* ***los titulares de los proyectos de inversión en la modalidad de asociación público privada*** *de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y de manera progresiva, para lo cual se le autoriza, durante el año fiscal 2025, a realizar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático para financiar la escala que se apruebe en el marco de lo dispuesto en la presente disposición.* 4. *Para efectos de implementar lo dispuesto en la presente disposición, exonérese a* ***los titulares de los proyectos de inversión en la modalidad de asociación público privada*** *del tope de ingresos establecido en el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 038-2006.* *(...)* ***DÉCIMA PRIMERA. Exceptuar a los titulares de los proyectos de inversión en la modalidad de asociación público privada del régimen laboral*** *del servicio civil.* *Los titulares se rigen por el régimen laboral de la actividad privada y no está comprendido en los alcances del régimen laboral del Servicio Civil, regulado en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.* ***DÉCIMA SEGUNDA. Incorporación excepcional de personal*** *Autorizar, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2025,* ***a los titulares de los proyectos de inversión en la modalidad de asociación***

la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025 – Ley 32185. *La presente disposición se financia con cargo a los recursos de Proinversión, y de ser el caso con cargo a las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional que se aprueban a favor de dicha entidad en el marco de la Centésima Vigésima Primera Disposición Complementaria Final de la presente Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025 – Ley 32185, pudiendo solicitar la transferencia de dichos recursos para financiar la aplicación de lo establecido en la presente disposición".*	***público privada**, la incorporación de personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad laboral, para este efecto, los titulares de los proyectos de inversión en la modalidad de asociación público privada se encuentran exonerados de lo establecido en el numeral 8.1 del artículo 8 y el numeral 8.1 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025 – Ley 32185.* *La presente disposición se financia con cargo a los recursos de los titulares de los proyectos de inversión en la modalidad de asociación público privada, y de ser el caso con cargo a las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional que se aprueban a favor de dicha entidad en el marco de la Centésima Vigésima Primera Disposición Complementaria Final de la presente Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025 – Ley 32185, pudiendo solicitar la transferencia de dichos recursos para financiar la aplicación de lo establecido en la presente disposición".*
DÉCIMA CUARTA. Rol de Entidad Pública Titular del Proyecto de los Ministerios y Entidades del Gobierno Nacional autorizados por ley expresa *Los Ministerios y las entidades públicas del Gobierno Nacional que a la fecha de promulgación de la presente norma ejercen el rol de entidad pública titular del proyecto y hayan suscrito contratos de APP, mantienen su posición contractual, así como todas las competencias y responsabilidades vinculadas con dicho rol, durante el plazo de vigencia del respectivo contrato de asociación público privada, incluyendo las ampliaciones y/o renovaciones de plazo que haya acordado o pueda acordar, dentro de los límites temporales establecidos en el artículo 55.* *La función de Proinversión respecto a la emisión del informe no vinculante sobre el contenido, sustento y aplicación de las cláusulas, tiene como objeto a los contratos de Asociación Público Privada descritos en el párrafo precedente.*	***DÉCIMA CUARTA. Rol de Entidad Pública Titular del Proyecto de los Ministerios y Entidades del Gobierno Nacional autorizados por ley expresa*** *Los Ministerios y las entidades públicas del Gobierno Nacional que a la fecha de promulgación de la presente norma ejercen el rol de entidad pública titular del proyecto y hayan suscrito contratos de APP, mantienen su posición contractual, así como todas las competencias y responsabilidades vinculadas con dicho rol, durante el plazo de vigencia del respectivo contrato de asociación público privada, incluyendo las ampliaciones y/o renovaciones de plazo que haya acordado o pueda acordar, dentro de los límites temporales establecidos en el artículo 55.* *La función de Proinversión respecto a la emisión del informe no vinculante sobre el contenido, sustento y aplicación de las cláusulas, tiene como objeto a los contratos de Asociación Público Privada descritos en el párrafo precedente.* ***Las disposiciones establecidas en la presente ley se aplicarán a los contratos de Asociación Público Privada suscritos con anterioridad a su entrada en vigencia, y; que se mantengan bajo la administración de ministerios y entidades públicas del Gobierno Nacional, en su calidad de concedentes.***

DÉCIMA SÉTIMA. Reglas adicionales de Titularidad de Proyectos *Proinversión, con excepción de los proyectos del sector electricidad, asume el rol de entidad pública titular del proyecto de los contratos de APP suscritos dentro de los doce (12) meses previos a la promulgación de la presente Ley, que tengan un Costo Total de Inversión superior a las 80 mil (80,000) UIT. Para tal efecto, Proinversión y los inversionistas de los respectivos contratos de APP, adoptan los actos de ejecución contractual necesarios para implementar la presente disposición, sin que sea necesario la suscripción de adendas para la modificación contractual. Asimismo, las Partes buscarán los mecanismos correspondientes para la suspensión de las obligaciones que correspondan.* *El Estado Peruano ratifica las seguridades y garantías otorgadas en el marco de los respectivos contratos de APP, así como la validez de los convenios de estabilidad jurídica suscritos al amparo de la normativa vigente y demás derechos adquiridos a la fecha. Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente Ley, a solicitud del inversionista, se emiten los actos necesarios para dar cumplimiento a la presente disposición.* *Proinversión hace efectivo la función de asumir el rol de entidad pública titular del proyecto al día siguiente de la entrada en vigencia del Reglamento de la presente Ley.*	***DÉCIMA SÉTIMA. Reglas adicionales de Titularidad de Proyectos*** *Proinversión, con excepción de los proyectos del sector electricidad, asume el rol de entidad pública titular del proyecto de los contratos de APP suscritos dentro de los doce (12) meses previos a la promulgación de la presente Ley, que tengan un Costo Total de Inversión superior a las 80 mil (80,000) UIT. Para tal efecto, Proinversión y los inversionistas de los respectivos contratos de APP, adoptan los actos de ejecución contractual necesarios para implementar la presente disposición, sin que sea necesario la suscripción de adendas para la modificación contractual.* ***Asimismo, las Partes implementan los mecanismos contractuales para la suspensión de las obligaciones que correspondan.*** *El Estado Peruano ratifica las seguridades y garantías otorgadas en el marco de los respectivos contratos de APP, así como la validez de los convenios de estabilidad jurídica suscritos al amparo de la normativa vigente y demás derechos adquiridos a la fecha. Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente Ley, a solicitud del inversionista, se emiten los actos necesarios para dar cumplimiento a la presente disposición.* *Proinversión hace efectivo la función de asumir el rol de entidad pública titular del proyecto al día siguiente de la entrada en vigencia del Reglamento de la presente Ley.*

5. Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Sobre la vulneración de las competencias exclusivas de los Ministerios y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

El artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (en adelante, la LOPE), establece que las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política del Perú, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico y desarrollan sus funciones dentro de las facultades que les estén conferidas.

De acuerdo con su artículo 1, la LOPE establece los principios y las normas básicas de organización, competencias y funciones del Poder Ejecutivo, como parte del Gobierno Nacional, entre otros, en el marco de la Constitución Política del Perú y la Ley de Bases de la Descentralización.

Así, el artículo 4 de la LOPE dispone lo siguiente:

"***Artículo 4.- Competencias exclusivas del Poder Ejecutivo***

El Poder Ejecutivo tiene las siguientes competencias exclusivas:

1. Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno.
(...)
2. Ejercer, pudiendo desconcentrar pero no delegar, las funciones y atribuciones inherentes a:
(...)
h. Regulación de los Servicios Públicos de su responsabilidad;
i. Regulación de la infraestructura pública de carácter y alcance nacional;
j. Otras que le señale la ley conforme a la Constitución Política del Perú.

***Los Ministerios** y Entidades Públicas del Poder Ejecutivo **ejercen sus competencias exclusivas** en todo el territorio nacional con arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normatividad específica y están sujetos a la política nacional y sectorial.*
(...)." (El subrayado es agregado)

Según puede apreciarse, de acuerdo a la LOPE, los Ministerios ejercen sus funciones individualizados por sectores.

El artículo 22 de la LOPE prevé que el ámbito de competencia y estructura básica de cada uno de los Ministerios se establece en su Ley de Organización y Funciones.

Asimismo, el numeral 23.2 del artículo 23 de la LOPE dispone que:

"*23.2. Para el ejercicio de las **competencias exclusivas**, corresponde a los Ministerios:*
a) Ejecutar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales.
b) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones, de acuerdo a las normas de la materia;
c) Planificar, financiar y garantizar la provisión y prestación de servicios públicos, de acuerdo a las normas de la materia;" (El subrayado es agregado)

En el marco de las normas antes citadas, el artículo 4 de la Ley de Organización y Funciones del MTC (LOF del MTC) establece que el **Ministerio de Transportes y Comunicaciones es competente de manera exclusiva, entre otros, en materia de infraestructura y servicios de transportes de alcance nacional e internacional y en materia de infraestructura y servicios de comunicaciones**.

Al respecto, el artículo 6 de la LOF del MTC dispone que el MTC tiene las siguientes funciones específicas:

"***Artículo 6.- Funciones específicas de competencias exclusivas***
En el marco de sus competencias exclusivas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cumple las siguientes funciones específicas:
1. Planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar los servicios de transporte aéreo y transporte multimodal, así como la aeronavegación y seguridad de la aeronáutica civil.
2. Planear, regular, autorizar, gestionar, supervisar y evaluar los servicios postales, así como administrar, supervisar y evaluar los servicios públicos de telecomunicaciones, servicios de radiodifusión y servicios privados de telecomunicaciones.
3. Planear, supervisar y evaluar la infraestructura de comunicaciones.
4. Otras funciones que señale la ley." (El subrayado es agregado)

Del mismo modo, en atención a las competencias exclusivas de los Ministerios previstas en la LOPE, actualmente, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1362, establece que el Ministerio, Gobierno Regional, Gobierno Local u otra entidad pública habilitada mediante ley expresa,

asume la titularidad del proyecto a desarrollarse mediante la modalidad de Asociación Público Privada o la modalidad de Proyecto en Activos, reguladas en el Decreto Legislativo N° 1362, y ejerce, entre otras, las siguientes funciones:

- Identificar y priorizar los proyectos a ser desarrollados bajo las modalidades de Asociación Público Privada y Proyectos en Activos, así como elaborar el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas.
- Formular los proyectos a ser ejecutados bajo las modalidades Asociación Público Privada y Proyectos en Activos.
- Suscribir los contratos derivados de las modalidades reguladas en el Decreto Legislativo N° 1362 y acordar la modificación de los mismos.
- Gestionar y administrar los contratos derivados de las modalidades de Asociación Público Privada y Proyectos en Activos, y cumplir las obligaciones contractuales a su cargo.

Sin embargo, el artículo 7 de la Autógrafa de Ley propone que PROINVERSIÓN, en lugar de los Ministerios, sea la entidad que asuma las funciones como entidad pública titular del proyecto y ejerza las funciones antes mencionadas, entre otras.

Por lo expuesto, **la Autógrafa de Ley estaría contraviniendo lo establecido en la LOPE sobre las competencias exclusivas de los Ministerios y, de manera específica, lo establecido en la LOF del MTC respecto de las competencias exclusivas asignadas al MTC**.

Además, debe tenerse en cuenta que, para modificar una ley orgánica como la LOPE se requiere mayoría calificada.

Sobre la vulneración del artículo 62 de la Constitución Política del Perú

La Décimo Séptima Disposición Complementaria Final de la Autógrafa de Ley dispone que:

> "***DÉCIMA SÉTIMA. Reglas adicionales de Titularidad de Proyectos***
>
> *Proinversión, con excepción de los proyectos del sector electricidad, asume el rol de entidad pública titular del proyecto de los contratos de APP suscritos dentro de los doce (12) meses previos a la promulgación de la presente Ley, que tengan un Costo Total de Inversión superior a las 80 mil (80,000) UIT. Para tal efecto, Proinversión y los inversionistas de los respectivos contratos de APP, adoptan los actos de ejecución contractual necesarios para implementar la presente disposición, sin que sea necesario la suscripción de adendas para la modificación contractual.*
>
> *El Estado Peruano ratifica las seguridades y garantías otorgadas en el marco de los respectivos contratos de APP, así como la validez de los convenios de estabilidad jurídica suscritos al amparo de la normativa vigente y demás derechos adquiridos a la fecha. Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente Ley, a solicitud del inversionista, se emiten los actos necesarios para dar cumplimiento a la presente disposición.*
>
> *Proinversión hace efectiva la función de asumir el rol de entidad pública titular del proyecto al día siguiente de la entrada en vigencia del Reglamento de la presente Ley.*" (El subrayado es agregado)

Según se observa, la Autógrafa de Ley dispone que PROINVERSIÓN asumirá el rol de entidad pública titular del proyecto de los Contratos de Asociación Público Privada suscritos dentro de los doce meses previos a la promulgación de la Autógrafa de Ley, que tengan un Costo Total de Inversión superior a las 80,000 UIT, sin que sea necesario la suscripción de adendas para

la modificación contractual, disponiendo además, que PROINVERSIÓN asume el rol de entidad pública titular del proyecto de inversión, al día siguiente de la entrada en vigencia del Reglamento de la presente Ley.

Al respecto, se debe tener presente que el artículo 62 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente:

> "***Artículo 62.-*** *La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato.* ***Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase****. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.*
>
> *Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades.* ***No pueden ser modificados legislativamente****, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.*" (El subrayado y resaltado son agregados)

Los Contratos de Asociación Público Privada suscritos por este Ministerio y aquellos que serán suscritos dentro del respectivo proceso de promoción de la inversión privada seguido ante el Organismo Promotor de la Inversión Privada, contemplan una cláusula que regula las modificaciones contractuales, en las cuales se establece que toda modificación a los mismos se efectuará mediante acuerdo escrito de las partes y siguiendo el procedimiento previsto para tal efecto, tanto en el mismo contrato como en la normatividad aplicable.

Por tanto, al establecer que PROINVERSIÓN asumirá el rol de entidad pública titular del proyecto de los Contratos de Asociación Público Privada a que se refiere la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final de la Autógrafa de Ley, sin necesidad de suscribir una adenda de modificación contractual, la Autógrafa de Ley estaría modificando lo dispuesto en los Contratos de Asociación Público Privada suscritos por este Ministerio y aquellos que serán suscritos dentro del respectivo proceso de promoción de la inversión privada.

Por tanto, **lo dispuesto en la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final de la Autógrafa de Ley vulnera lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, según el cual, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase**.

Asimismo, **en caso los Contratos de Asociación Público Privada tengan la condición de contratos-ley, la Autógrafa de Ley estaría vulnerando el segundo párrafo del artículo 62 de la Constitución, según el cual estos no pueden ser modificados legislativamente**.

Por las razones expuestas, se observa la Autógrafa de Ley, en aplicación del artículo 108 de la Constitución Política del Perú.

Atentamente,

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

EDUARDO MELCHOR ARANA YSA
Presidente del Consejo de Ministros

Proyecto de Ley: 10512/2024-CR
10752/2024-CR

PERÚ
CONGRESO de la REPÚBLICA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, **29** de **mayo** del **2025**

Habiendo sido observada la autógrafa de ley, pase a la comisión de:

1 ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA

GIOVANNI FORNO FLOREZ
Oficial Mayor
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS

TÍTULO I

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto regular el marco institucional y los procesos para el desarrollo de proyectos con participación privada bajo las modalidades de Asociaciones Público Privada y de Proyectos en Activos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente ley se aplica a las entidades públicas pertenecientes al Sector Público No Financiero, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero.

Artículo 3. Promoción de la inversión privada

3.1 Declárese de interés nacional la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, dada su relevante contribución al crecimiento de la economía nacional, al cierre de brechas en infraestructura, en servicios públicos y servicios vinculados, a la generación de empleo productivo y a la competitividad del país.

3.2 El rol del Estado incluye las labores de seguimiento y la realización de acciones para facilitar la ejecución oportuna de los proyectos desarrollados bajo las modalidades reguladas en la presente ley, de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 4.

Artículo 4. Principios

4.1 Durante el desarrollo de los proyectos regulados bajo la presente ley, se aplican los siguientes principios:







1. ***Competencia**: Los procesos de promoción de la inversión privada promueven la igualdad de trato entre los postores, quedando prohibidas, además, todo tipo de conductas que pueda afectar la competencia entre los postores.*
2. ***Transparencia**: Toda la información que se utilice para la toma de decisiones para un proyecto llevado a cabo bajo el marco de la presente ley, es de conocimiento público, de acuerdo al artículo 3 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las excepciones previstas en la normativa vigente.*
3. ***Enfoque de resultados**: Las entidades públicas que se indican en el artículo 2, para el desarrollo de sus funciones, adoptan las acciones que permitan la ejecución de la inversión privada dentro de los respectivos plazos, evitan retrasos derivados de formalismos; así como, identificar, informar e implementar acciones orientadas a resolver la problemática que afecta a los proyectos, tales como:*
    a. *Entre dos o más alternativas legalmente viables, se opta por la que permita la efectiva promoción de la inversión y la ejecución del proyecto en los plazos correspondientes, la que garantice la disponibilidad del servicio, la que permita alcanzar o mantener los niveles de servicio del proyecto, o la que resulte más conveniente en términos de costos, eficiencia o sostenibilidad.*
    b. *En todas las fases del proyecto, se da celeridad a las actuaciones, bajo un sentido de urgencia, evitando acciones que generen retrasos basados en formalismos.*
    c. *En el caso de controversias durante la ejecución del proyecto, cuando se cuente con pruebas, evaluaciones o elementos de juicio que permitan determinar que es más conveniente en términos de costo beneficio, se opta por el trato directo o Junta de Resolución de Disputas, en lugar de acudir al arbitraje.*







4. ***Planificación***: *El Estado, a través de las entidades públicas competentes, prioriza y orienta el desarrollo ordenado de las Asociaciones Público Privadas y de los Proyectos en Activos, según las prioridades y planes nacionales, sectoriales, regionales y locales, incluyendo y sin limitarse para ello a la política de descentralización del país.*
5. ***Responsabilidad presupuestal***: *Para asumir los compromisos financieros firmes y contingentes derivados directa o indirectamente de la ejecución de los contratos celebrados en el marco de la presente ley, se considera la declaración de uso de recursos públicos, la capacidad de financiamiento o la capacidad presupuestal, según corresponda; sin comprometer en el corto, mediano ni largo plazo, el equilibrio presupuestario de las entidades públicas, la sostenibilidad de las finanzas públicas, ni la prestación regular de los servicios públicos.*
6. ***Integridad***: *La conducta de quienes participan en los procesos de promoción de la inversión privada está guiada por la honestidad, la rectitud, la honradez y la veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la que, en caso de producirse, es comunicada a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna.*
7. ***Sostenibilidad***: *Los proyectos desarrollados en el marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada son planificados, priorizados, diseñados, ejecutados, operados y revertidos de manera que garanticen la sostenibilidad en cada una de las siguientes dimensiones: (i) económica y financiera, (ii) social, (iii) institucional y (iv) ambiental, que considere la resiliencia climática. Las dimensiones de sostenibilidad de los proyectos se consideran un conjunto integrado e indivisible, aplicable durante todo el ciclo de vida del proyecto.*

4.2 Adicionalmente, para las Asociaciones Público Privadas, resultan aplicables los siguientes principios:

1. *Valor por dinero: En todas las fases de los proyectos de Asociación Público Privada, las entidades públicas titulares de proyectos buscan la combinación óptima entre los costos y la calidad del servicio público*







ofrecido a los usuarios, teniendo en cuenta una adecuada distribución de riesgos en cada una de las referidas fases. La generación de valor por dinero en las fases de desarrollo de las APP es responsabilidad del Organismo Promotor de la Inversión Privada o de la entidad pública titular del proyecto y puede darse de manera no limitativa al momento de:

1. *Priorizar los proyectos que promuevan la disponibilidad de la infraestructura o servicios relacionados al proyecto.*
2. *Seleccionar la modalidad de ejecución más adecuada para llevar a cabo el proyecto, teniendo en cuenta la aplicación de los criterios de elegibilidad.*
3. *Identificar los riesgos y distribuirlos a aquella parte con mayores capacidades para administrarlos.*
4. *Asegurar las condiciones de competencia, a través de un proceso de promoción transparente, garantizando la igualdad de condiciones entre todos los participantes.*
5. *Establecer mecanismos de pago vinculados a la prestación del servicio y/o disponibilidad de la infraestructura.*

2. *Adecuada distribución de riesgos: En los proyectos de Asociación Público Privada se efectúa una adecuada distribución de riesgos entre las partes, de manera que sean asignados a aquella parte con mayor capacidad para gestionarlos y consecuentemente, mitigarlos de la forma más eficiente y que genere mayor valor por dinero.*

TÍTULO II

MARCO INSTITUCIONAL

CAPÍTULO I

SISTEMA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

<u>Artículo 5</u>. *Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada*

5.1 El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada es un sistema funcional para el desarrollo de las Asociaciones Público Privadas y de los Proyectos en Activos.







5.2 El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada está integrado por las entidades públicas a las que se refiere el artículo 2, principios, normas, procedimientos, lineamientos y directivas técnico normativas, orientados a promover y agilizar de manera efectiva la inversión privada, a fin de contribuir al crecimiento de la economía nacional, al cierre de brechas en infraestructura o en servicios públicos, a la generación de empleo productivo y a la competitividad del país.

5.3 La política nacional del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada tiene por finalidad el desarrollo y promoción de las Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos en los diversos sectores de la actividad económica, la cual es de obligatorio cumplimiento para las entidades del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba la política nacional del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.

5.4 El ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Proinversión, que como tal se encarga de las siguientes funciones:

1. *Establecer los lineamientos de promoción y desarrollo de la inversión privada en Asociaciones Público Privadas y en Proyectos en Activos.*
2. *Emitir opinión vinculante exclusiva y excluyente, en el ámbito administrativo, sobre la interpretación y la aplicación de la presente ley, y en general del marco normativo del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, de conformidad con lo establecido en la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de la potestad interpretativa de los órganos jurisdiccionales ni del Congreso de la República.*
3. *Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas la formulación de la política nacional del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.*

4. *Evaluar el cumplimiento e impacto de la política de promoción de la inversión privada y desarrollo de las Asociaciones Público Privadas y en Proyectos en Activos.*
5. *Administrar el Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público Privadas.*
6. *Fortalecer capacidades y brindar asistencia técnica a los integrantes del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.*

5.5 Las políticas y lineamientos de promoción y desarrollo de la inversión privada en Asociaciones Público Privadas y en Proyectos en Activos a los que se refiere el numeral 5.3 y 5.4, son de cumplimiento obligatorio, bajo responsabilidad, para las entidades del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada que intervienen en cualquiera de las fases de desarrollo de las Asociaciones Público Privadas, o de los Proyectos en Activos, salvo que estas fundamenten adecuadamente una propuesta distinta, en cuyo caso, deben incluir el respectivo análisis en los informes que sustentan las solicitudes de opinión previa.

5.6 Las opiniones, decisiones, actuaciones y actos se emiten según el nivel de avance e información disponible en cada una de las fases de los proyectos de una Asociación Público Privada, incluyendo sus modificaciones contractuales, de conformidad con lo que disponga el Reglamento.

Artículo 6. Ministerio de Economía y Finanzas

6.1 El Ministerio de Economía y Finanzas tiene las siguientes funciones:

1. *Establecer la política nacional para el desarrollo y promoción de las Asociaciones Público Privada y Proyectos en Activos, en los diversos sectores de la actividad económica, la cual es de obligatorio cumplimiento para las entidades del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.*
2. *Emitir opiniones reguladas en el Subcapítulo III del Capítulo I del Título III y los artículos 58 y 59 de la presente ley. Dichas opiniones*







son formuladas por las unidades orgánicas del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de sus respectivas competencias legales.

3. *Administrar el Registro de Compromisos, que incluye aquellos compromisos firmes y contingentes cuantificables de las garantías, de los pasivos y de los demás instrumentos conexos y colaterales, así como de los ingresos derivados de los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Asociación Público Privada.*
4. *Establecer, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, la relación de proyectos priorizados de las entidades públicas de Gobierno Nacional que serán desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada a cargo de Proinversión.*
5. *Otras funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del MEF.*

6.2 El Ministerio de Economía y Finanzas emite opiniones previas vinculantes en las fases de los proyectos de Asociaciones Público Privadas, en el marco de sus competencias, exclusivamente sobre las siguientes materias, considerando la oportunidad y alcance definidos en el Reglamento:

1. *Capacidad de financiamiento o Capacidad presupuestal, para el cumplimiento de obligaciones derivadas del contrato, según corresponda.*
2. *Compromisos firmes y contingentes explícitos.*
3. *Garantías financieras y no financieras.*
4. *Equilibrio Económico Financiero. En el caso de los proyectos de competencia de Proinversión, la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas al Equilibrio Económico Financiero se realiza únicamente sobre proyectos con un Costo Total de Inversión o Costo Total del Proyecto, cuando el contrato solo incluya actividades de Operación y Mantenimiento, mayor o igual a las cien mil (100,000) UIT.*

5. *Criterios de elegibilidad, únicamente para las Asociaciones Público Privadas a cargo de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.*

Artículo 7. Entidades públicas titulares de proyectos

7.1 Proinversión, el Gobierno Regional y el Gobierno Local asumen las funciones como entidad pública titular del proyecto y ejercen las siguientes funciones:

1. *Gestionar y administrar los contratos que suscriban, derivados de las modalidades reguladas en la presente ley, y cumplir las obligaciones contractuales a su cargo.*
2. *Hacer efectivas las penalidades por incumplimiento del contrato, salvo que dicha función haya sido asignada o delegada al organismo regulador respectivo.*
3. *Acordar la modificación de los contratos, conforme a las condiciones que establezca la presente ley y su Reglamento.*
4. *Efectuar el seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos regulados en la presente ley bajo su competencia.*
5. *Sustentar la capacidad de financiamiento o la capacidad presupuestal, según corresponda, para asumir los compromisos de los contratos de Asociación Público Privada y de sus modificaciones.*
6. *Declarar la suspensión o caducidad del contrato, cuando concurran las causales previstas en el mismo.*
7. *Otras funciones conforme al marco normativo vigente.*

7.2. Para el caso de Proinversión, como Entidad pública titular del proyecto ejerce, además, las siguientes funciones:

1. *Formular los proyectos bajo la modalidad de Asociación Público Privada.*
2. *Elaborar los estudios técnicos para el Informe de Evaluación.*
3. *Suscribir los contratos bajo la modalidad de Asociación Público Privada.*







7.3. Para el caso del Gobierno Regional o del Gobierno Local, como entidad pública titular del proyecto ejerce, además, las siguientes funciones:

1. *Identificar y priorizar los proyectos a ser desarrollados bajo las modalidades de Asociación Público Privada y Proyectos en Activos, así como elaborar el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas, a fin de planificar el desarrollo de los proyectos de inversión regulados en la presente ley.*
2. *Formular los proyectos a ser ejecutados bajo las modalidades reguladas en la presente ley, para lo cual, puede encargar a Proinversión la contratación de los estudios respectivos.*
3. *Elaborar el Informe de Evaluación. Tratándose de proyectos encargados a Proinversión, el Informe de Evaluación es elaborado por dicha entidad.*
4. *Coordinar con el Organismo Promotor de la Inversión Privada para el desarrollo de los procesos de promoción de la inversión privada y emitir opinión previa favorable a los aspectos de su competencia, las cuales versan sobre:*
   a. *Aspectos técnicos del diseño del proyecto que generen obligaciones y responsabilidades contractuales a su cargo, así como los niveles de servicio.*
   b. *Otras que establezca el marco normativo vigente.*
5. *Suscribir los contratos derivados de las modalidades reguladas en la presente ley.*
6. *Encargar a Proinversión la administración del contrato de Asociación Público Privada durante la fase de ejecución contractual en los supuestos en los que no resulta obligatorio que Proinversión asuma la titularidad del proyecto, según lo establecido en la presente ley y el Reglamento.*







7.4. En el caso de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la entidad pública titular del proyecto asigna las funciones vinculadas a la fase de Ejecución Contractual señaladas en el presente artículo, a un órgano dentro de su estructura organizacional o al Comité de Promoción de la Inversión Privada.

7.5. En los proyectos que involucran competencias de más de una entidad o nivel de gobierno, se deben adoptar los acuerdos necesarios para determinar la entidad que asume la calidad de titular del proyecto, así como las principales reglas aplicables al proceso de promoción y a la ejecución del respectivo contrato. La suscripción de dicho acuerdo constituye requisito para la incorporación del proyecto al proceso de promoción.

7.6. Las entidades públicas, incluyendo las empresas del Estado, que incumplan o resuelvan los acuerdos que se suscriban en el marco del presente artículo, se hacen responsables por todos los costos y daños que resulten de dicho incumplimiento o resolución. Dichas entidades pueden establecer el carácter irrevocable de los referidos acuerdos durante el plazo de vigencia que se determine para cada proyecto.

7.7. Proinversión puede ejercer el rol de entidad pública titular del proyecto por delegación, encontrándose habilitada para efectuar las funciones establecidas en el presente artículo, durante las fases de Planeamiento y Programación, Formulación, Estructuración, Transacción y de Ejecución Contractual. Para dichos fines, Proinversión suscribe un convenio con la entidad o entidades públicas titulares del proyecto, según corresponda.

7.8 Tratándose del encargo regulado en el párrafo precedente, los bienes que formen parte de los proyectos de Asociaciones Público Privadas permanecen bajo la titularidad de las entidades públicas titulares de proyecto originales, asimismo, los presupuestos asignados a la ejecución de los proyectos permanecen en las entidades titulares de proyectos, bajo la administración de Proinversión, según lo que se señale en el Reglamento.







<u>Artículo 8</u>. Comité de Promoción de la Inversión Privada

8.1 Para el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que cuenten con proyectos o prevean desarrollar procesos de promoción de la inversión privada, bajo las modalidades reguladas en la presente ley, deben crear el Comité de Promoción de la Inversión Privada cuando los proyectos a su cargo no tengan a Proinversión como Organismo Promotor de la Inversión Privada. La entidad pública titular de proyecto puede implementar solo un Comité de Promoción de la Inversión Privada por cada uno de los sectores bajo su competencia.

8.2 El Comité de Promoción de la Inversión Privada asume el rol de Organismo Promotor de la Inversión Privada, en los procesos de promoción bajo su competencia, conforme a lo establecido en el artículo 9. En este supuesto, el Consejo Regional o Concejo Municipal, según corresponda, ejerce las funciones del Consejo Directivo de Proinversión.

8.3 La designación de los miembros del Comité de Promoción de la Inversión Privada se efectúa mediante Resolución del Gobernador Regional o Resolución de Alcaldía, según se trate de Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales. Dichas resoluciones se publican en el diario oficial El Peruano y se comunican al Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público Privadas.

<u>Artículo 9</u>. Organismos Promotores de la Inversión Privada

9.1 Los Organismos Promotores de la Inversión Privada se encargan de diseñar, conducir y concluir el proceso de promoción de la inversión privada mediante las modalidades de Asociación Público Privada y de Proyectos en Activos, bajo el ámbito de su competencia. Además, son responsables de los documentos técnicos y las opiniones que emiten, así como por sus respectivos sustentos.



9.2 En el caso del Gobierno Nacional, el Organismo Promotor de la Inversión Privada es Proinversión, teniendo a su cargo la elaboración del Informe de Evaluación.



9.3 Tratándose de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, las facultades del Organismo Promotor de la Inversión Privada se ejercen a través del Comité de Promoción de la Inversión Privada. El órgano máximo de estos Organismos Promotores de la Inversión Privada es el Consejo Regional o el Concejo Municipal, respectivamente.



9.4 Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales pueden encargar el proceso de promoción a Proinversión, así como solicitarle asistencia técnica en cualquiera de las fases de los proyectos de Asociación Público Privada y de Proyectos en Activos.

Artículo 10. Organismos Reguladores

10.1 Los Organismos Reguladores, en el marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, tienen la función de emitir opinión previa no vinculante, la cual versa exclusivamente sobre los aspectos relacionados a régimen tarifario, régimen de acceso y niveles del servicio, en el marco de la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, sus normas de creación y sus respectivos reglamentos.

10.2 La opinión previa no vinculante de los Organismos Reguladores se emiten sobre los siguientes documentos:

1. *Versión inicial del contrato.*
2. *Versión final del contrato.*
3. *Modificaciones contractuales.*

Artículo 11. Contraloría General de la República

11.1 La Contraloría General de la República se rige según lo dispuesto en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. En el marco del Sistema Nacional





de Promoción de la Inversión Privada, tiene la función de emitir Informe Previo no vinculante a:

1. *Versión inicial del contrato, en el caso de iniciativas privadas cofinanciadas.*
2. *Versión final del contrato, en el caso de proyectos de Asociación Público Privada cofinanciada.*
3. *Modificaciones contractuales, de corresponder.*



11.2 En línea con lo señalado en el párrafo precedente, el Informe Previo de la Contraloría General de la República se refiere únicamente a aquellos aspectos que comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado, relacionados al cofinanciamiento o garantías del proyecto, de conformidad con lo previsto en el inciso l) del artículo 22 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

11.3 Dicho informe previo es no vinculante, y, en ningún caso, sustituye el criterio técnico del funcionario o las decisiones discrecionales adoptadas en el marco de lo señalado en el artículo 14 de la presente norma.

11.4 La presente disposición sobre los informes previos se aplica sin perjuicio del control posterior, en cuyo caso la potestad sancionadora en materia de responsabilidad administrativa funcional de la Contraloría General de la República únicamente abarca la supervisión de la legalidad en la ejecución del presupuesto y las operaciones de endeudamiento público, pero no todo acto que las entidades, sus funcionarios o servidores realicen.

<u>Artículo 12</u>. Seguimiento de la inversión y soporte especializado

12.1 Para los proyectos priorizados, según los criterios que establezca el Reglamento, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión, realiza el acompañamiento, seguimiento, articulación y simplificación en todas las







fases de los proyectos de inversión que se desarrollen bajo los mecanismos regulados en la presente ley, para lo cual, puede convocar a entidades del sector público o privado.

12.2 *Las entidades públicas señaladas en el artículo 2 están obligadas a atender los requerimientos de información que realice el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión, bajo responsabilidad administrativa, en el plazo y condiciones que establezca el Reglamento.*

12.3 *Durante la fase de Ejecución Contractual, a solicitud de la entidad pública titular del proyecto encargada de la administración de los contratos de Asociación Público Privada, Proinversión, en los casos que no se constituya como entidad pública titular del proyecto, brinda soporte especializado en materia legal, económica, financiera y técnica, sobre aspectos de alta complejidad, de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos en el Reglamento.*

Artículo 13. Prioridad en trámites

Las entidades públicas señaladas en el artículo 2, bajo responsabilidad, darán prioridad a los proyectos a desarrollarse mediante Asociación Público Privada, en la valoración y trámites respecto del cumplimiento de los requisitos para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones que se requieran para el inicio y continuación de obras.

Artículo 14. Facultad discrecional de las entidades públicas

14.1 *Las entidades públicas que tienen a su cargo la aprobación, opinión, conducción, ejecución, supervisión y fiscalización, en cualquiera de las fases de los proyectos regulados en la presente ley, están facultadas para actuar discrecionalmente, en el ámbito de sus competencias, con el fin de optar por la decisión administrativa, debidamente sustentada, que se considere más conveniente en el caso concreto, conforme a lo establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley 29622, Ley que modifica la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y*







de la Contraloría General de la República y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

14.2 Los informes de control no pueden incluir en ninguno de sus extremos responsabilidad penal sin que se haya identificado de manera concurrente los elementos del tipo y las pruebas suficientes que acrediten la presunta comisión del delito. Asimismo, los hallazgos deben sustentarse en algún perjuicio económico, concreto y debidamente sustentado, bajo responsabilidad de los funcionarios de la referida entidad.

14.3 Del mismo modo, las resoluciones judiciales o laudos arbitrales que resuelvan controversias derivadas de contratos desarrollados al amparo de la presente ley, no pueden ser empleadas para imputar responsabilidad funcional.

CAPÍTULO II

PROINVERSIÓN

Artículo 15. Proinversión

15.1 Proinversión es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, con competencia a nivel nacional, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Constituye pliego presupuestal.

15.2 La gestión de Proinversión está orientada a resultados, con eficiencia, eficacia, transparencia, calidad e integridad.

15.3 La Alta Dirección de Proinversión está integrada por el Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General. Asimismo, la estructura de Proinversión comprende a los Comités Especiales de Inversiones.

15.4 La estructura orgánica de Proinversión se rige por su Reglamento de Organización y Funciones.







15.5 Además de las funciones de rectoría del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada reguladas en el artículo 5 y de entidad pública titular del proyecto reguladas en el artículo 7, Proinversión ejerce las siguientes funciones:

1. *Diseñar, conducir y concluir el proceso de promoción de la inversión privada de los proyectos desarrollados mediante las modalidades de Asociación Público Privada y de Proyectos en Activos, bajo el ámbito de su competencia, unificando la toma de decisiones dentro del proceso; así como, promoción y asistencia a la inversión extranjera en otras actividades económicas.*
2. *Intervenir en la fase de ejecución contractual, de acuerdo con lo previsto en la presente ley y en su Reglamento.*
3. *Brindar Asistencia Técnica mediante la suscripción de convenios o apoyo a las entidades públicas a las que se refiere el artículo 2, en las distintas fases de los proyectos de Asociación Público Privada y de Proyectos en Activos.*
4. *Actuar como Unidad Formuladora, para lo cual se debe suscribir el respectivo convenio con la entidad pública titular del proyecto en los casos que no actúe como entidad pública titular del proyecto.*
5. *Durante la fase de ejecución contractual y siempre que la entidad pública titular del proyecto lo haya solicitado, Proinversión emite informe no vinculante sobre el contenido, sustento y aplicación de las cláusulas establecidas en los contratos de Asociación Público Privada en los que haya participado como Organismo Promotor de Inversión Privada. La referida facultad no implica la limitación del derecho del inversionista de someter la interpretación del contrato de Asociación Público Privada a los mecanismos de solución de*



controversias establecidos en el respectivo contrato y aquellos permitidos por la ley.

6. *Establecer oficinas desconcentradas a nivel nacional, como órganos que impulsan y apoyan la promoción de la inversión privada en las localidades y regiones del país.*
7. *Ejecutar la meta para la adquisición o expropiación de predios y liberación de interferencias que requiere el proyecto para su adjudicación, y diseñar la estrategia para su implementación, para lo cual cuenta con la opinión previa favorable de la entidad pública titular del proyecto. Para ello, Proinversión ejerce el rol de Sujeto Activo al que se refiere el Decreto Legislativo 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, hasta la suscripción del respectivo contrato de Asociación Público Privada, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.*
8. *Otras funciones conforme al marco normativo vigente.*

15.6 Las entidades señaladas en el artículo 2, adoptan los acuerdos, o realizan las gestiones o actos necesarios para ejecutar las decisiones de los Comités Especiales de Inversiones, sin excepción y en el marco de sus competencias. Se presume que estas decisiones tienen relación directa o indirecta con la promoción de la inversión privada para el desarrollo de Asociaciones Público Privadas y de Proyectos en Activos.

15.7 La responsabilidad que emane de los acuerdos que adopten o de las gestiones y actos que ejecuten las referidas entidades, corresponde exclusivamente a la Presidencia Ejecutiva de Proinversión y a los Comités Especiales de Inversiones, según corresponda.

15.8 *El Reglamento establece las condiciones bajo las cuales, Proinversión evalúa los encargos de procesos de promoción de la inversión privada realizados por las entidades públicas titulares de proyecto.*

15.9 *Proinversión, en su rol de Organismo Promotor de la Inversión Privada, aplica mecanismos disuasivos a las entidades públicas titulares de proyectos, para evitar que abandonen sus proyectos en cartera, entre ellos, el reembolso de los gastos incurridos por Proinversión.*

Artículo 16. Estructura orgánica básica

16.1 *La estructura orgánica básica está compuesta por los siguientes órganos:*

1. *Órganos de Alta Dirección*
   a. *Consejo Directivo*
   b. *Presidencia Ejecutiva*
   c. *Gerencia General*
2. *Órganos de Control*
3. *Órganos de Administración Interna*
4. *Órganos de Línea*

16.2 *Las competencias de Proinversión se ejercen a través de sus órganos de línea. El desarrollo de la estructura, organización y funciones son establecidas en su Reglamento de Organización y Funciones.*

Artículo 17. Presidencia Ejecutiva

17.1 *La Presidencia Ejecutiva es la más alta autoridad de Proinversión. Está a cargo del presidente ejecutivo, quien es la máxima autoridad ejecutiva, representante legal, y titular de la entidad y del pliego presupuestal. El presidente ejecutivo es designado por el presidente de la República, a propuesta del Ministro de Economía y Finanzas, mediante Resolución Suprema.*

17.2 *Los requisitos mínimos que debe cumplir el presidente ejecutivo son:*

1. *Ser profesional con no menos de diez (10) años de ejercicio.*
2. *Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional.*

3. *Acreditar por lo menos, estudios de maestría concluidos.*
4. *No contar con antecedentes penales ni judiciales.*
5. *No encontrarse suspendido o inhabilitado en el ejercicio de la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada.*
6. *No estar en situación de concurso o inhabilitado para contratar con el Estado.*
7. *No encontrarse condenado por delito doloso.*
8. *No tener conflicto de intereses con las materias relacionadas al ejercicio de su función.*

17.3 La Presidencia Ejecutiva cumple las siguientes funciones específicas:

1. *Crear los Comités Especiales de Inversiones y designar a sus miembros, aprobando sus funciones, poderes y niveles de decisión, en el marco de lo establecido en la presente ley y en su Reglamento.*
2. *Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas el Reglamento de Organización y Funciones de Proinversión.*
3. *Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la escala remunerativa para su aprobación, en el marco de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.*
4. *Decidir la incorporación y la exclusión de proyectos del proceso de promoción.*
5. *Ratificar los acuerdos de los Comités Especiales de Inversiones que aprueban los principales hitos de los proyectos desarrollados bajo las modalidades de Asociación Público Privada y de Proyecto en Activos, previa verificación de la consistencia del proceso.*
6. *Establecer los objetivos estratégicos institucionales, metas e indicadores vinculados a la promoción y desarrollo de las Asociaciones Público Privadas y de los Proyectos en Activos, en el marco de la transparencia en la gestión y de la rendición de cuentas.*

7. *Aprobar las directivas internas que regulen las materias bajo el ámbito de competencia de Proinversión, en el marco de las políticas y lineamientos de promoción y desarrollo de la inversión privada en Asociaciones Público Privadas y en Proyectos en Activos.*
8. *Dirigir y supervisar la marcha institucional de Proinversión.*
9. *Ejercer los poderes y cumplir las funciones que se precisen en el Reglamento de Organización y Funciones.*
10. *Las demás funciones que establezca el Reglamento.*

Artículo 18. Comités Especiales de Inversiones

18.1 *Los Comités Especiales de Inversiones son órganos colegiados encargados de aprobar y elevar a la Presidencia Ejecutiva, para su ratificación, los siguientes documentos que corresponden a los principales hitos del proceso: informe de evaluación, bases, versión inicial del contrato previa a la fase de transacción, versión final del contrato y sus respectivas modificaciones sustanciales, Declaratoria de Interés, así como las modificaciones sustanciales de los referidos documentos y todos aquellos actos dispuestos por la Presidencia Ejecutiva.*

18.2 *Los Comités Especiales de Inversiones dependen de la Presidencia Ejecutiva, el cual designa a sus integrantes y determina el número de dichos Comités, en atención a las materias involucradas y a la carga procedimental existente.*

18.3 *Al momento de su designación, los integrantes de los Comités Especiales de Inversiones deben estar libres de conflictos de intereses que, por su frecuencia o magnitud, les impida el pleno ejercicio de sus funciones. En los casos de conflictos de intereses sobrevinientes que impidan el desempeño de funciones, el miembro del Comité Especial de Inversiones es cesado y reemplazado, en la oportunidad en la que Proinversión toma conocimiento de dicha circunstancia, sin perjuicio de la responsabilidad a la que hubiera lugar por las actuaciones realizadas con anterioridad.*

Artículo 19. Directores de Proyectos y Direcciones Especiales

19.1 Los Directores de Proyectos se encargan de dirigir y ejecutar las acciones que corresponden durante el proceso de promoción de la inversión privada.

19.2 La Presidencia Ejecutiva, según criterios debidamente sustentados, puede disponer la creación de Direcciones Especiales para agrupar a los Directores de Proyectos. Los Directores de Proyectos dependen técnicamente de las Direcciones Especiales.

19.3 Los Directores de Proyectos y los Directores Especiales son designados por la Presidencia Ejecutiva.

Artículo 20. Seguros de responsabilidad para funcionarios

Proinversión puede contratar seguros de responsabilidad administrativa, civil y/o penal para sus funcionarios y servidores responsables de adoptar decisiones en el marco de los proyectos desarrollados bajo las modalidades reguladas en la presente ley. Adicionalmente, los funcionarios y servidores puede adoptar los mecanismos de defensa legal contemplados en la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.

Artículo 21. Publicidad de acuerdos y opiniones

21.1 El Plan de Promoción de la Inversión Privada y sus modificatorias, contiene la información establecida en el Reglamento y se incorpora en el informe de evaluación. El Plan de Promoción es publicado en el Portal Institucional del Organismo Promotor de la Inversión Privada competente dentro de los dos (2) días hábiles de aprobado el informe de evaluación.

21.2 Las opiniones emitidas por los organismos reguladores en los procesos de promoción bajo su competencia, regulados en la presente norma, y en el Decreto Legislativo 674, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la Inversión Privada de las empresas del Estado, son publicadas en el Portal Institucional de Proinversión, dentro de un plazo



no menor a quince (15) días calendario anteriores a la fecha de aprobación de la versión final del contrato. Asimismo, para conocimiento público, dentro del mismo plazo, se publica un aviso en el diario oficial El Peruano, indicando la dirección electrónica y el enlace en el cual se encuentran las mencionadas opiniones.



21.3 Las publicaciones a que se refiere el numeral 4 del artículo 4 del Decreto Legislativo 674, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la Inversión Privada de las empresas del Estado, son realizadas mediante la publicación, en el diario oficial El Peruano, de los avisos que consignan la dirección electrónica y del enlace en el que se puede acceder al proyecto de contrato a suscribirse. La publicación del proyecto de contrato se realiza con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles a la fecha de su suscripción. El contrato definitivo es publicado en la misma forma, dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores a la fecha de la suscripción de este.



<u>Artículo 22</u>. Fondo de Promoción de la Inversión Privada

22.1 Proinversión administra y dirige el Fondo de Promoción de la Inversión Privada - FONCEPRI. Los recursos de dicho fondo son destinados, bajo responsabilidad, a financiar las actividades propias de Proinversión para los proyectos desarrollados bajo las modalidades reguladas en la presente ley.

22.2 Son recursos del FONCEPRI los siguientes:

1. El monto que se establece en cada caso, mediante Resolución del Presidente Ejecutivo, a propuesta y con el sustento del Director de Proyecto, sobre la base del tipo de proyecto de que se trate, salvo para el caso establecido en el inciso 2 de este numeral. Por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se determina el mecanismo general para el cálculo del monto indicado.

2. *El monto equivalente al 2% del producto de la venta de los activos de las entidades públicas, para el caso de Proyectos en Activos bajo su competencia.*
3. *Las donaciones internas y externas que se obtengan para el cumplimiento de la presente ley.*
4. *Los ingresos financieros que genere la administración de sus propios recursos.*

Otros que se le asignen.

TÍTULO III

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

CAPÍTULO I

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

SUBCAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

<u>Artículo 23</u>. Definición

23.1 Las Asociaciones Público Privadas constituyen una modalidad de participación de la inversión privada, mediante contratos de largo plazo en los que interviene el Estado, a través de alguna entidad pública y uno o más inversionistas privados para garantizar niveles de servicio óptimos para los usuarios.

23.2 Mediante Asociaciones Público Privadas se desarrollan proyectos de infraestructura pública, servicios públicos, servicios vinculados a infraestructura pública y servicios públicos, investigación aplicada, y/o innovación tecnológica.

23.3 En las Asociaciones Público Privadas, se distribuyen riesgos y recursos; en este último caso, preferentemente privados.

23.4 Las Asociaciones Público Privadas se originan por iniciativa estatal o por iniciativa privada.

Artículo 24. Contratos de Asociación Público Privada

24.1 El contrato que se celebra para desarrollar un proyecto bajo la modalidad de Asociación Público Privada constituye título suficiente para que el inversionista haga valer los derechos que dicho instrumento le otorga frente a terceros; en especial, los mecanismos de recuperación de las inversiones y los beneficios adicionales expresamente convenidos, pudiendo incluir servicios complementarios.

24.2 El inversionista puede explotar los bienes objeto del contrato de Asociación Público Privada, directamente o a través de terceros, de acuerdo al Reglamento, manteniendo en todo momento su calidad de único responsable frente al Estado peruano. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos de Asociación Público Privada que recaigan sobre bienes públicos, no otorgan al inversionista un derecho real sobre los mismos.

24.3 El inversionista no puede establecer unilateralmente exenciones en favor de usuario alguno, bajo responsabilidad, salvo lo establecido por ley expresa.

Artículo 25. Clasificación

Las Asociaciones Público Privadas se clasifican en:

1. *Cofinanciadas: son aquellas que requieren fondos públicos, u otorgamiento o contratación de garantías financieras, o garantías no financieras que tiene alta probabilidad de demandar cofinanciamiento.*
2. *Autofinanciadas: son aquellas con capacidad propia de generación de ingresos, que no requieren cofinanciamiento y cumplen con las siguientes condiciones:*
    a. *Demanda mínima o nula de garantía financiera por parte del Estado, conforme lo establece el Reglamento.*
    b. *Las garantías no financieras tienen una probabilidad nula o mínima de demandar cofinanciamiento, conforme lo establece el Reglamento.*

Artículo 26. Garantías del Estado

26.1 Las garantías otorgadas para los proyectos de Asociación Público Privada se clasifican en:

1. *Garantías Financieras: son aquellos aseguramientos de carácter incondicional y de ejecución inmediata, otorgados y contratados por el Estado, con el fin de respaldar las obligaciones de la entidad pública titular del proyecto, en el marco del Decreto Legislativo 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público.*
2. *Garantías No Financieras: son aquellos aseguramientos estipulados en el contrato de Asociación Público Privada que potencialmente pueden generar obligaciones de pago a cargo del Estado, por la ocurrencia de uno o más eventos de riesgos propios del proyecto.*

26.2 Proinversión puede solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas el otorgamiento o contratación de garantías financieras para los proyectos de su competencia, con el fin de respaldar las obligaciones de la entidad pública titular del proyecto.

Artículo 27. Compromisos firmes y contingentes

27.1 Los compromisos firmes y contingentes que asumen las entidades públicas titulares de los proyectos de Asociación Público Privada son clasificados de la siguiente manera:

1. *Compromisos firmes: son las obligaciones de pago de importes específicos o cuantificables a favor de su contraparte, correspondiente a una contraprestación por la realización de los actos previstos en el contrato de Asociación Público Privada.*
2. *Compromisos contingentes: son las potenciales obligaciones de pago a favor de su contraparte, estipuladas en el contrato de Asociación Público Privada, que se derivan de la ocurrencia de uno*

o más eventos correspondientes a riesgos propios del proyecto de Asociación Público Privada.

27.2 Los compromisos netos de ingresos y gastos derivados directa e indirectamente de los contratos de Asociación Público Privada se financian con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

27.3 Las entidades públicas titulares de proyectos, con cargo a los límites de la asignación presupuestal total y, en concordancia con los límites de gasto establecidos en el Marco Macroeconómico Multianual, incluyen en su presupuesto institucional los créditos presupuestarios necesarios para financiar los compromisos derivados de los contratos suscritos o por adjudicar bajo la modalidad de Asociación Público Privada, bajo responsabilidad de los respectivos titulares de las referidas entidades, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

<u>Artículo 28</u>. Declaración de uso de recursos públicos y capacidad de financiamiento

28.1 La declaración de uso de recursos públicos contiene una proyección de los gastos requeridos para el financiamiento del proyecto de Asociación Público Privada y es realizada por la entidad pública titular del proyecto, considerando un horizonte de diez (10) años conforme a la normativa vigente del Sistema Nacional de Promoción de Inversión Privada.

28.2 La declaración de uso de recursos públicos forma parte del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas y del Informe de Evaluación de los proyectos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. En el caso del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas, esta declaración considera todos los proyectos a cargo de la entidad pública titular del proyecto.







28.3 Para los proyectos de competencia de Proinversión, únicamente para las fases de estructuración, transacción y ejecución contractual, dicha entidad sustenta la capacidad de financiamiento para el cumplimiento de obligaciones derivadas del contrato, la cual deberá encontrarse dentro del límite aprobado por el MEF. La capacidad de financiamiento está considerada dentro del presupuesto de Proinversión.

28.4 En la fase de ejecución contractual, el MEF emite opinión únicamente cuando la modificación contractual requiera mayor cofinanciamiento. Si producto de la modificación contractual, se requiere cofinanciamiento, este es asumido por la entidad pública titular del proyecto sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

28.5 Para los proyectos de competencia del Gobierno Regional y Gobierno Local la capacidad presupuestal es sustentada por la entidad pública titular del proyecto para las fases de estructuración, transacción y ejecución contractual, cuando corresponda.

28.6 Asimismo, para la presentación de iniciativas privadas cofinanciadas, las entidades públicas titulares de proyectos sustentan la capacidad de financiamiento o la capacidad presupuestal máxima a la que se refiere el artículo 49.

<u>Artículo 29</u>. Seguridades, garantías y estabilidad jurídica

29.1 De acuerdo con lo señalado en el artículo 1357 del Código Civil, el Estado queda autorizado para otorgar mediante contrato, a las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que realicen inversiones al amparo de la presente ley, las seguridades y garantías que mediante decreto supremo, en cada caso, se consideren necesarias para proteger sus inversiones, de acuerdo con la legislación vigente.

29.2 Tratándose de contratos de Asociación Público Privada, resulta aplicable lo previsto en el artículo 19 del Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las







obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado mediante Decreto Supremo 059-96-PCM.

<u>Artículo 30</u>. Autorización para el otorgamiento de garantías

30.1 Tratándose de concesiones de infraestructura pública y de servicios públicos, la entidad pública titular del proyecto puede autorizar al inversionista el establecimiento de una hipoteca sobre el derecho de concesión. Dicha hipoteca surte efectos desde su inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. La hipoteca puede ser ejecutada extrajudicialmente en la forma pactada por las partes, al constituirse la obligación con la participación del Estado y de los acreedores.

30.2 Para la ejecución de la hipoteca es necesaria la opinión favorable de la entidad pública titular del proyecto, de manera que el derecho de concesión solo puede ser transferido a favor de quien cumpla, como mínimo, con los requisitos establecidos en las Bases del proceso de promoción.

30.3 En los contratos de Asociación Público Privada, pueden constituirse garantías sobre los ingresos respecto a obligaciones derivadas de dicho contrato y de su explotación, así como, garantías mobiliarias sobre las acciones o participaciones del inversionista. El respectivo contrato puede establecer otras garantías, conforme a la normativa vigente.

30.4 Corresponde a la entidad pública titular del proyecto la revisión de los documentos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido, Cierre Financiero o análogos. Sin perjuicio de lo establecido en el presente numeral, el Reglamento puede establecer los supuestos en los que se requiere opinión previa del Organismo Promotor de la Inversión Privada y/o del organismo regulador.

<u>Artículo 31</u>. Límite

31.1 El stock acumulado por los compromisos firmes y contingentes cuantificables, netos de ingresos, asumidos por el Sector Público No







Financiero en los contratos de Asociación Público Privada, calculado a valor presente, no puede exceder del 12% del producto bruto interno.

31.2 *Este límite puede ser revisado cada tres (03) años, pudiendo ser modificado mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta los requerimientos de infraestructura y de servicios públicos en el país, así como el impacto de los compromisos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.*

31.3 *Mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, se establecen los indicadores, parámetros y metodologías de cálculo para los compromisos firmes y contingentes cuantificables, gasto disponible y pasivos a ser asumidos por las entidades públicas titulares de proyectos de Asociación Público Privada.*

Artículo 32. Oferta del adjudicatario

El organismo regulador y la entidad pública titular del proyecto, velan por el cumplimiento de las condiciones y términos propuestos en las ofertas técnica y/o económica del adjudicatario del proceso de promoción, las cuales forman parte integrante del contrato de Asociación Público Privada.

Artículo 33. Impedimentos

Están impedidos de participar como postores o inversionistas, directa o indirectamente, las siguientes personas:

1. *Aquellas a las que se refiere el artículo 1366 del Código Civil.*
2. *Las que tienen impedimentos establecidos en la en la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, o la que la sustituya.*
3. *Las que tienen impedimentos establecidos por normas con rango de ley.*
4. *Las que habiendo sido inversionistas en contratos de Asociación Público Privada hubieran dejado de serlo por incumplimiento del contrato. Este impedimento tiene una vigencia de dos (02) años y se extiende a los socios estratégicos y/o aquellos que hayan ejercido control del inversionista al momento de la resolución y/o caducidad del respectivo contrato, sin*

perjuicio de aquellos impedimentos establecidos en la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas o la que la sustituya, los cuales se rigen por los plazos estipulados en dicha norma.

SUBCAPÍTULO II

REGLAS PROCEDIMENTALES

Artículo 34. Fases

34.1 Los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Asociación Público Privada, independientemente de su clasificación y origen, se desarrollan en las siguientes fases: planeamiento y programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual.

34.2 Los requisitos, procedimientos y plazos de cada fase se establecen en el Reglamento.

34.3 Es obligación de la entidad pública titular del proyecto iniciar tempranamente el proceso de identificación, adquisición, saneamiento, y expropiación de los predios y áreas necesarias y de respaldo para la ejecución del proyecto, así como la liberación de interferencias, bajo responsabilidad. Asimismo, la entidad pública titular del proyecto está facultada para realizar los procesos de reubicación o reasentamiento que permitan la liberación y saneamiento de terrenos y predios para la implementación del proyecto en los plazos previstos.

34.4 El Organismo Promotor de la Inversión Privada establece en el Informe de Evaluación, la meta para la adquisición o expropiación de predios y liberación de interferencias que requiere el proyecto para su adjudicación, así como la estrategia para su implementación, bajo responsabilidad. Para dicho efecto, elabora el diagnóstico técnico - legal y la ruta crítica que garanticen y sustenten el cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato.

34.5 La entidad pública titular del proyecto puede destinar una partida presupuestal específica para estos fines, incluso antes de la declaración de viabilidad del proyecto.







<u>Artículo 35</u>. Fase de planeamiento y programación

35.1 La fase de planeamiento y programación comprende la planificación de los proyectos y de los compromisos, firmes o contingentes, correspondientes a Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

35.2 Dicha planificación se articula con la Programación Multianual de Inversiones y se materializa en el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas. El Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas incluye los proyectos a ejecutarse mediante las modalidades de Asociación Público Privada y de Proyectos en Activos. Para el caso de los proyectos de Asociación Pública Privada a cargo de Proinversión, se materializa mediante decreto supremo que aprueba la relación de proyectos priorizados de las entidades públicas de Gobierno Nacional que serán desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada.

<u>Artículo 36</u>. Fase de Formulación

36.1. La fase de formulación comprende el diseño y/o evaluación del proyecto. Está a cargo de la entidad pública titular del proyecto o del Organismo Promotor de la Inversión Privada, en el marco de sus respectivas competencias.

36.2. La formulación de las Asociaciones Público Privadas, incluyendo la elaboración de los estudios técnicos, independientemente de su clasificación autofinanciada o cofinanciada, es regulada por la normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.

36.3 La fase de formulación culmina con la incorporación del proyecto al proceso de promoción.

36.4 Los proyectos de Asociación Público Privada que contengan únicamente actividades de operación y mantenimiento, así como los proyectos de

Asociación Público Privada de líneas de transmisión eléctrica pasan directamente a la fase de Estructuración.

Artículo 37. Fase de Estructuración

37.1 La fase de estructuración comprende el diseño del proyecto como Asociación Público Privada, incluida su estructuración económico financiera, mecanismo de retribución en caso corresponda, asignación de riesgos y diseño del contrato. La estructuración está a cargo del Organismo Promotor de la Inversión Privada, en coordinación con la entidad pública titular del proyecto, con el organismo regulador, de corresponder, y con el Ministerio de Economía y Finanzas.

37.2 La fase de estructuración culmina con la publicación de la versión inicial del contrato o de la declaratoria de interés, según corresponda.

37.3 Durante la fase de estructuración se puede recoger información producto de la interacción con el mercado.

Artículo 38. Fase de Transacción

38.1 La fase de transacción comprende la apertura al mercado del proyecto. El Organismo Promotor de la Inversión Privada recibe y evalúa los comentarios de los postores y determina el mecanismo de adjudicación aplicable, el cual puede ser licitación pública, concurso de proyectos integrales u otros mecanismos competitivos.

38.2 La fase de transacción culmina con la suscripción del contrato.

Artículo 39. Fase de ejecución contractual

39.1 La fase de ejecución contractual comprende el periodo de vigencia del contrato de Asociación Público Privada, bajo responsabilidad de la entidad pública titular del proyecto. Asimismo, comprende el seguimiento y supervisión de las obligaciones contractuales.

39.2 La fase de Ejecución Contractual culmina con la caducidad del respectivo contrato.

SUBCAPÍTULO III

APROBACIONES Y OPINIONES

Artículo 40. Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas

40.1 Corresponde a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales incorporar en el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas, la declaración de uso de recursos públicos, conforme lo establecido en el Reglamento, bajo responsabilidad.

40.2 Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprueban el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas, lo cual incluye, bajo responsabilidad, la modalidad de los proyectos propuestos, sobre la base del análisis preliminar de los beneficios de desarrollar el proyecto bajo la modalidad de Asociación Público Privada, en comparación con la modalidad de obra pública, en función a los criterios establecidos en el Reglamento.

Artículo 41. Opinión previa al informe de evaluación

41.1 Antes del inicio del proceso de promoción del proyecto de Asociación Público Privada a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el Organismo Promotor de la Inversión Privada, sin excepción y bajo responsabilidad, debe solicitar y contar con la opinión favorable de dichas entidades públicas titulares de proyectos respecto al informe de evaluación. En caso de que entidad pública titular del proyecto no emita su opinión dentro del plazo previsto, se considera que es favorable.

41.2 Durante esta fase, corresponde a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales incorporar en el Informe de Evaluación, la declaración de uso de recursos públicos, conforme a lo establecido en el Reglamento, bajo responsabilidad. La opinión señalada en el párrafo precedente no incluye la evaluación de la declaración de uso de recursos públicos.







<u>Artículo 42</u>. Criterios para la incorporación de los proyectos al proceso de promoción

42.1 El proceso de promoción está conformado por las fases de estructuración y transacción. El Reglamento establece los requisitos, plazos y criterios de elegibilidad de los proyectos a ser incorporados al proceso de promoción.

42.2 El presidente ejecutivo de Proinversión aprueba la incorporación de proyectos al proceso de promoción; sin que ello limite modificaciones posteriores al proyecto, las cuales son debidamente sustentadas.

42.3 En los proyectos de alcance regional o local, la incorporación es realizada mediante Acuerdo de Consejo Regional o Acuerdo de Concejo Municipal, respectivamente.

<u>Artículo 43</u>. Opinión previa a la versión Inicial del Contrato en la fase de Estructuración

43.1 En la fase de Estructuración, el Organismo Promotor de la Inversión Privada, elabora la Versión Inicial del Contrato y solicita las opiniones señaladas en el artículo 45.

43.2 El Reglamento determina los requisitos que debe cumplir el Organismo Promotor de la Inversión Privada para la elaboración de dicha Versión Inicial del Contrato, entre los cuales se encuentran, estudios técnicos, estudios económico financieros, informe que sustente la adecuada asignación de riesgos y valuación de contingencias, modelo económico financiero que sustente el esquema de financiamiento y pagos del proyecto, e informe sobre el estado de terrenos necesarios para ejecución del proyecto.

43.3 Los requisitos establecidos en el presente artículo, así como las opiniones previas establecidas en el artículo 45, lo cual incluye la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la República, no resultan exigibles, en esta fase, para los proyectos



autofinanciados que no requieren ningún tipo de garantía y cuyo costo total de Inversión no supera el monto establecido en el Reglamento, con excepción de las iniciativas privadas.

<u>Artículo 44</u>. Opinión previa a la Versión final del contrato en la fase de Transacción



De manera previa a la adjudicación, el Organismo Promotor de la Inversión Privada elabora la versión final del contrato y, sin excepción y bajo responsabilidad, recaba las opiniones establecidas en el artículo 45.

<u>Artículo 45</u>. Opiniones e informes previos en las fases de estructuración y transacción



45.1 El Organismo Promotor de la Inversión Privada, sin excepción y bajo responsabilidad, recaba, en la fase de estructuración, las siguientes opiniones exclusivamente sobre la versión inicial del contrato de Asociación Público Privada:

1. *Opinión previa de la entidad pública titular del proyecto, o de Proinversión, en caso ejerza dicho rol, conforme a sus competencias.*
2. *Opinión previa no vinculante del organismo regulador, exclusivamente sobre las materias de sus competencias.*
3. *Opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a sus competencias.*
4. *Informe Previo no vinculante de la Contraloría General de la República cuando se trate de iniciativas estatales y privadas sobre proyectos que comprometen el crédito o la capacidad financiera del Estado.*

45.2 Las opiniones a la versión inicial del contrato solicitada durante la fase de estructuración, pueden emitirse incluyendo observaciones a ser subsanadas por el Organismo Promotor de la Inversión Privada durante la fase de transacción. Las opiniones antes señaladas, respecto de la versión final del contrato, solo pueden referirse a aquellos aspectos sobre

los cuales se emitió observación y a los aspectos distintos o adicionales respecto de la versión inicial del contrato solicitada en la fase de estructuración.

45.3. *De no contar con la opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas a la versión final del contrato, dicho contrato y su adjudicación no surten efectos y son nulos de pleno derecho, salvo el supuesto señalado en el numeral 45.8 del presente artículo.*

45.4. *El informe previo de la Contraloría General de la República respecto de la versión final del contrato, se refiere únicamente a aquellos aspectos que comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado, relacionados al cofinanciamiento o garantías del Proyecto, de conformidad con lo previsto en el inciso l) del artículo 22 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Dicho informe previo es no vinculante, sin perjuicio de control posterior, según lo señalado en el artículo 11 de la presente ley.*

45.5 *Para el caso de iniciativas privadas, el Informe Previo de la Contraloría General de la República se emite respecto a la Versión Inicial del Contrato, previo a la Declaratoria de Interés. En caso se incorporen modificaciones a la versión inicial del contrato contenida en la Declaratoria de Interés, se requerirá el Informe Previo de la Contraloría General de la República para la adjudicación.*

45.6 *Las entidades públicas que emiten las opiniones e informes señalados en el presente artículo, se encuentran obligadas a realizar una revisión integral de las respectivas versiones de contratos en relación con las materias de sus competencias. Asimismo, están obligadas a formular, en una sola oportunidad, todas las observaciones que correspondan.*

45.7 *Los plazos y procedimientos para la emisión de los informes y opiniones son establecidos en el Reglamento.*







45.8 Habiéndose solicitado los informes y opiniones previas y de no emitirse estos dentro de los plazos previstos, son considerados favorables, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de proyectos encargados a Proinversión como Organismo Promotor de la Inversión Privada, el presidente ejecutivo puede decidir la exclusión del proyecto del proceso de promoción, ante la falta de pronunciamiento de la entidad pública titular del proyecto en los plazos previstos, y aplicar lo establecido en el numeral 15.9 del artículo 15.

45.9 Una vez suscrito el respectivo contrato, el Ministerio de Economía y Finanzas publica los informes que emita sobre las respectivas versiones del contrato.

SUBCAPÍTULO IV

INICIATIVAS ESTATALES

Artículo 46. Definición de iniciativas estatales

Las iniciativas estatales constituyen un mecanismo por el cual, las entidades públicas a las que se refiere el artículo 7 desarrollan, por iniciativa propia, proyectos de Asociación Público Privada, de acuerdo con las fases establecidas en la presente norma.

La entidad pública titular del proyecto puede adquirir estudios técnicos a una empresa privada para desarrollar proyectos bajo la modalidad de Asociación Público Privada que generen beneficios sociales, en cuyo caso dicha entidad puede realizar la iniciativa estatal reconociendo el costo de esos estudios.

Artículo 47. Procedimiento simplificado

47.1 Los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa estatal o privada cuyo Costo Total de Inversión o Costo Total del Proyecto sea menor o igual a cien mil (100,000) UIT; así como para aquellas APP que involucren exclusivamente actividades de operación y mantenimiento en las que Proinversión sea el Organismo Promotor de la Inversión Privada se tramitan a través de un procedimiento simplificado.

47.2 *El Reglamento establece las fases, reglas especiales y plazos para el desarrollo del procedimiento simplificado.*

SUBCAPÍTULO V

INICIATIVAS PRIVADAS

Artículo 48. Definición de iniciativas privadas

48.1 *Las iniciativas privadas constituyen un mecanismo por el cual, las personas jurídicas del sector privado, nacionales o extranjeras, los consorcios de estas últimas, o los consorcios de personas naturales con personas jurídicas del sector privado, nacionales o extranjeras, presentan iniciativas para el desarrollo de proyectos bajo la modalidad de Asociación Público Privada.*

48.2 *Las iniciativas privadas autofinanciadas de ámbito nacional, así como las iniciativas privadas cofinanciadas de todas las entidades públicas titulares de proyectos, se presentan ante Proinversión, que actúa como Organismo Promotor de la Inversión Privada. La formulación de las iniciativas privadas cofinanciadas se sujeta a lo dispuesto en el párrafo 49.5 del artículo 49.*

48.3 *Las iniciativas privadas autofinanciadas de ámbito regional o local, son presentadas ante los Organismos Promotores de la Inversión Privada de los Gobiernos Regionales o de los Gobiernos Locales, en cualquier oportunidad, según lo establecido en el Reglamento.*

48.4 *Las iniciativas privadas tienen el carácter de peticiones de gracia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo que sea pertinente. En consecuencia, el derecho del proponente se agota con la presentación de la iniciativa privada ante el Organismo Promotor de la Inversión Privada, sin posibilidad de cuestionamiento o impugnación del pronunciamiento en sede administrativa o judicial. Las iniciativas privadas mantienen su carácter de petición de gracia hasta que se convoque el proceso de*

selección que corresponda, en cuyo caso, es de aplicación lo dispuesto en las respectivas bases y/o en la legislación respectiva, en lo que sea pertinente; o hasta la suscripción del contrato correspondiente, en caso se adjudique directamente por no haber terceros interesados.

48.5 Los Organismos Promotores de la Inversión Privada mantienen el carácter confidencial y reservado de las iniciativas privadas presentadas, bajo responsabilidad, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 37.3 del artículo 37. Esta obligación, se extiende a las entidades públicas, funcionarios públicos, asesores, consultores o cualquier otra persona que por su cargo, función o servicio, tomen conocimiento de la presentación y contenido de la iniciativa privada. El carácter confidencial y reservado de las iniciativas privadas se mantiene hasta la publicación de la declaratoria de interés, con excepción de la información que debe ser publicada de acuerdo con lo que establezca el Reglamento.

<u>Artículo 49</u>. Presentación de iniciativas privadas cofinanciadas

49.1 La presentación de iniciativas privadas cofinanciadas para proyectos a ser financiados total o parcialmente por el Gobierno Nacional, se realiza en los plazos y sobre las materias que se determinen mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas.

49.2 Proinversión publica las necesidades de intervención en infraestructura pública, servicios públicos, o servicios vinculados a infraestructura pública o servicios públicos, así como capacidad de financiamiento máxima para asumir dichos compromisos, la cual les es comunicada previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas.

49.3 Las iniciativas privadas cofinanciadas para proyectos a ser financiados por los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales se presentan anualmente ante Proinversión, dentro del plazo establecido en el Reglamento.







49.4 Previamente, el Gobierno Regional y el Gobierno Local publican las necesidades de intervención en infraestructura pública, servicios públicos, servicios vinculados a infraestructura pública o servicios públicos, investigación aplicada y/o innovación tecnológica, así como su capacidad presupuestal máxima para asumir dichos compromisos, la cual les es comunicada previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas.

49.5 La formulación y declaratoria de viabilidad de los proyectos de inversión comprendidos dentro de la iniciativa privada cofinanciada, es responsabilidad de la entidad pública titular del proyecto, pudiendo encargar la contratación de la asesoría a Proinversión, según corresponda. La elaboración del informe de evaluación, la estructuración y la transacción están a cargo únicamente de Proinversión.

49.6 Los contratos y sus modificaciones que deriven de proyectos de competencia de Gobiernos Regionales y de Gobiernos Locales son suscritos con el adjudicatario, con la intervención de Proinversión, al cual se le puede delegar la administración de los referidos contratos.

<u>Artículo 50</u>. Procedimiento

50.1 Los plazos y los procedimientos de presentación, priorización, formulación y estructuración de las iniciativas privadas son establecidos en el Reglamento.

50.2 Si transcurrido el plazo de noventa (90) días calendario contados desde la publicación de la Declaratoria de Interés, sin que ningún tercero manifieste su interés en la ejecución del proyecto, se procede a la adjudicación directa a favor del proponente de la iniciativa privada. En caso se presentara un solo postor a la convocatoria, el concurso se llevará a cabo considerando únicamente a dicho postor y el proponente.

50.3 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, tratándose de iniciativas privadas de alcance local que abarcan competencias compartidas entre municipalidades distritales y municipalidades provinciales, si estas

últimas no emiten opinión de relevancia favorable, están obligadas a sustentar su respectiva decisión.

50.4 En caso de proyectos que involucren a más de una entidad o nivel de gobierno, el acuerdo regulado en el numeral 7.5 se suscribe dentro del plazo para la emisión de la opinión de relevancia. En caso contrario se entiende que la iniciativa privada ha sido rechazada.

Artículo 51. Reembolso de gastos a favor del proponente

Procede el reembolso de gastos a favor del proponente, cuando este participe en el proceso de promoción que se convoque y presente una propuesta económica declarada válida, siempre que no resulte favorecido con la adjudicación de la buena pro, conforme a lo establecido en el Reglamento.

CAPÍTULO II

PROYECTOS EN ACTIVOS

Artículo 52. Definición de proyectos en activos

52.1 Los proyectos en activos constituyen una modalidad de participación de la inversión privada promovida por las entidades públicas con facultad de disposición de sus activos, así como por las entidades públicas a las que se refiere el artículo 7.

52.2 La aplicación de esta modalidad de participación de la inversión privada está a cargo del Organismo Promotor de la Inversión Privada respectivo y recae sobre activos de titularidad de las entidades públicas mencionadas en el numeral precedente, bajo los siguientes esquemas:

1. *Disposición de activos: implica la transferencia total o parcial, incluida la permuta de bienes inmuebles.*
2. *Contratos de cesión en uso, arrendamiento, usufructo, superficie u otras modalidades permitidas por ley.*

52.3 Los contratos de Proyectos en Activos no pueden comprometer recursos públicos, ni trasladar riesgos al Estado, salvo ley expresa que autorice a la entidad pública titular del proyecto a comprometer recursos públicos o trasladar riesgos al Estado bajo esta modalidad.

52.4 *Las entidades a las que se refiere el párrafo 52.1 pueden actuar como Organismo Promotor de la Inversión Privada, conforme a lo establecido en el Reglamento, y determinan las condiciones económicas del proyecto, los ingresos a favor del Estado y, de ser el caso, los compromisos de inversión.*

52.5 *Cuando el proyecto así lo requiera, pueden constituirse fideicomisos, conforme a lo previsto en el artículo 58, en lo que corresponda.*

52.6 *Para el desarrollo de Proyectos en Activos, la entidad pública titular del proyecto deberá cumplir con las disposiciones establecidas en el marco normativo vigente, incluyendo la regulación sectorial, de corresponder.*

Artículo 53. Iniciativas estatales sobre Proyectos en Activos

Tratándose de Proyectos en Activos por iniciativa estatal, el proceso de adjudicación se tramita conforme a las fases y plazos establecidos en el Reglamento.

Artículo 54. Iniciativas privadas sobre Proyectos en Activos

Las iniciativas privadas para el desarrollo de Proyectos en Activos y para los proyectos regulados en el Decreto Legislativo 674, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la Inversión Privada de las empresas del Estado, se rigen por las siguientes reglas:

1. *Son presentadas por personas jurídicas nacionales o extranjeras, por consorcios de estas, o por consorcios de personas naturales con personas jurídicas nacionales o extranjeras.*
2. *Se tramitan conforme al procedimiento que establece el Reglamento.*

TÍTULO IV

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CAPÍTULO I

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

Artículo 55. Plazo

Los proyectos desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada se otorgan por el plazo de vigencia indicado en el contrato, el que en ningún caso

excede de sesenta (60) años, salvo plazos menores establecidos en norma especial. El plazo de vigencia se inicia desde la fecha de suscripción del respectivo contrato.

Artículo 56. Seguimiento y administración contractual

56.1 Para el desarrollo de sus actividades en todas las fases, la entidad pública titular del proyecto recoge las mejores prácticas y altos estándares internacionales en materia de gestión y ejecución de proyectos.

56.2 Para tal efecto, podrá realizar la contratación de un tercero especializado que brinde servicios de oficina de gestión de proyectos (Project Management Office). A través del Reglamento, se establecerán los requisitos y procedimientos.

Artículo 57. Régimen de bienes

57.1 Los bienes que constituyen partes integrantes o accesorias del proyecto de Asociación Público Privada, no pueden ser transferidos separadamente de este, ni hipotecados, prendados o sometidos a gravámenes de ningún tipo, durante el plazo de vigencia del contrato, sin la aprobación de la entidad pública titular del proyecto. Al término del contrato, pasan al dominio del Estado.

57.2 El inversionista puede transferir los derechos establecidos en el contrato de Asociación Público Privada a otra persona jurídica, previa aprobación de la entidad pública titular del proyecto, y conforme a las limitaciones que establezca el respectivo contrato.

Artículo 58. Fideicomiso

58.1 La entidad pública titular del proyecto puede constituir fideicomisos para la administración de los pagos e ingresos derivados de los contratos de Asociación Público Privada, en concordancia con la normativa vigente.

58.2 Tratándose de Asociaciones Público Privadas de competencia de Proinversión, la constitución de los fideicomisos es aprobada previamente, mediante resolución del presidente ejecutivo.



58.3 *Tratándose de Asociaciones Público Privadas de competencia de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales, la constitución de fideicomisos es aprobada previamente, mediante Acuerdo de Consejo Regional o Acuerdo de Concejo Municipal, respectivamente.*



58.4 *Para la constitución de fideicomisos en Asociaciones Público Privadas cofinanciadas, así como para sus modificaciones, se requiere opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a la normativa vigente.*

Artículo 59. Modificaciones contractuales



59.1 *El Estado, de común acuerdo con el inversionista, puede modificar un contrato de Asociación Público Privada, manteniendo su equilibrio económico financiero, y las condiciones de competencia del proceso de promoción, conforme a las condiciones y requisitos que establece el Reglamento.*

59.2 *En el plazo de diez (10) días hábiles de recibida la solicitud de adenda, la entidad pública titular del proyecto convoca a las entidades públicas competentes que deben emitir opinión a la adenda propuesta, quienes asisten al proceso de evaluación conjunta, al cual también puede ser convocado el inversionista. En esta etapa, se puede solicitar información sobre el diseño del proyecto y del contrato al Organismo Promotor de la Inversión Privada, según corresponda, que tuvo a su cargo el proceso de promoción que originó el contrato, o al órgano que haga sus veces.*

59.3 *Dentro del plazo establecido en el Reglamento, Proinversión emite opinión no vinculante a los contratos de Asociación Público Privada cuyo proceso de promoción estuvo a su cargo.*

59.4 *Culminado el proceso de evaluación conjunta, la entidad pública titular del proyecto evalúa y sustenta las modificaciones contractuales; asimismo, solicita la opinión no vinculante del organismo regulador*

respectivo, así como la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, en caso se involucren materias de competencia de este último.

59.5 Los acuerdos que contengan modificaciones al contrato de Asociación Público Privada sobre materias de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que no cuenten con su opinión previa favorable, no surten efectos y son nulos de pleno derecho.

59.6 Recabadas las opiniones del organismo regulador y del Ministerio de Economía y Finanzas, la entidad titular del proyecto solicita a la Contraloría General de la República la emisión del informe previo, en caso las modificaciones incorporen o alteren el cofinanciamiento o las garantías del contrato de Asociación Público Privada. Dicho Informe Previo se emite en el plazo máximo de diez (10) días hábiles.

59.7 El Informe Previo tiene el carácter de no vinculante y versa sobre los aspectos que comprometen el crédito o la capacidad financiera del Estado, relacionados al cofinanciamiento o garantías del proyecto, de conformidad con lo previsto en el inciso l) del artículo 22 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

59.8 Una vez suscrita la modificación contractual, el organismo regulador y el Ministerio de Economía y Finanzas publican sus opiniones en sus respectivos portales institucionales.

59.9 De no emitirse las opiniones señaladas en este artículo dentro de los plazos previstos, se considera que son favorables.

59.10 Los demás plazos y procedimientos relacionados con la aplicación del presente artículo, así como las reglas o procedimientos especiales de modificación contractual se establecen en el Reglamento, respetando los principios establecidos en la presente ley. Entre los criterios que permiten establecer procedimientos y/o metodologías diferenciadas se encuentran, de manera enunciativa y no limitativa, las situaciones de emergencia







actuales o potenciales, declaradas por la entidad pública titular del proyecto, mediante el dispositivo legal que corresponda, la ocurrencia de eventos sobrevinientes, así como las inversiones adicionales que sean necesarias incluso fuera del área del proyecto a solicitud de la entidad pública titular del proyecto, según lo establecido en el Reglamento.

59.11 *El encargo de estudios de ingeniería al inversionista, o de sus respectivas modificaciones, durante la fase de ejecución contractual no se encuentra sujeto al procedimiento de modificación contractual regulado en el presente artículo.*

Artículo 60. Solución de controversias

60.1 *Los contratos de Asociación Público Privada incluyen una cláusula referida a la vía arbitral como mecanismo de solución de controversias. Los laudos arbitrales se publican en el portal institucional de la entidad pública titular del proyecto.*

60.2 *La entidad pública titular del proyecto garantiza la participación oportuna de los organismos reguladores en los procesos arbitrales, para coadyuvar al debido patrocinio del Estado. El árbitro o Tribunal Arbitral respectivo tiene la obligación de permitir la participación de los organismos reguladores en los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a su competencia, conforme a la normativa vigente.*

60.3 *Asimismo, las partes pueden someter sus controversias a una Junta de Resolución de Disputas, conforme a lo dispuesto en el respectivo contrato o por acuerdos entre las partes, siendo su decisión vinculante para las partes, lo cual no limita la facultad de recurrir al arbitraje.*

60.4 *Los procedimientos, instituciones elegibles, plazos y condiciones para la elección, designación y/o constitución de las Juntas de Resolución de Disputas se establecen en el Reglamento.*

60.5 *Lo dispuesto en los numerales precedentes, no se aplica a las controversias internacionales de inversión que se sometan al mecanismo internacional de solución de controversias a que se refiere la Ley 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión.*

60.6 *No se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, los servicios a ser brindados por los miembros de la Junta de Resolución de Disputas y por los centros ni las instituciones que administren los citados mecanismos alternativos de resolución de conflictos, siempre que dichos servicios sean requeridos dentro de la ejecución de los contratos de Asociación Público Privada.*

60.7 *Los laudos arbitrales, así como las recomendaciones y decisiones de la Junta de Resolución de Disputas, se publican en el portal institucional de la entidad pública titular del proyecto.*

60.8 *Las partes de los contratos de Asociación Público Privada que se encuentren vigentes a la fecha de emisión de la presente ley, a través de una modificación contractual podrán acordar incorporar a la Junta de Resolución de Disputas para emitir recomendaciones de oficio o a solicitud de las partes frente a un potencial desacuerdo y/o para resolver las controversias que se sometan a su conocimiento.*

<u>Artículo 61</u>. Supervisión de los contratos de Asociación Público Privada

61.1 *Tratándose de proyectos en sectores regulados, la supervisión se sujeta a lo dispuesto en la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y la normatividad vigente.*

61.2 *Los contratos de Asociación Público Privada contienen las disposiciones necesarias para asegurar una supervisión oportuna y eficiente durante la fase de ejecución contractual, con la finalidad de salvaguardar primordialmente el cumplimiento de los niveles de servicio.*







<u>Artículo 62</u>. Pagos por compensación, caducidad y liquidación

62.1 Cuando se produzca la caducidad de un contrato de Asociación Público Privada, la entidad pública titular del proyecto, directamente o a través de terceros, asume el proyecto de manera provisional. Para tal efecto, la entidad pública titular del proyecto queda facultada para realizar las gestiones y contrataciones necesarias para garantizar la continuidad del proyecto, por un periodo no mayor a los tres (03) años calendario.

62.2 Sin perjuicio de la normativa aplicable, los contratos de Asociación Público Privada pueden contener cláusulas que estipulen la indemnización a la cual tiene derecho el inversionista, en caso que el Estado suspenda o deje sin efecto el contrato de manera unilateral o por su propio incumplimiento.

62.3 Los contratos de Asociación Público Privada o sus respectivas modificaciones pueden incorporar cláusulas de compensación por perjuicios económicos o financieros generados por incumplimientos de la entidad pública titular del proyecto.

CAPÍTULO II

REGISTROS

<u>Artículo 63</u>. Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público Privadas

63.1 Proinversión administra el Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público Privadas, en el cual, se incorporan la Resolución Suprema o el Acuerdo de Consejo Regional o de Concejo Municipal que disponga la incorporación del proyecto al proceso de promoción, así como los contratos de Asociación Público Privada suscritos y sus respectivas adendas. El Reglamento puede establecer otros documentos a incorporarse a este Registro.

63.2 Las entidades públicas comprendidas en el artículo 2 tienen la obligación de remitir la información señalada en el numeral anterior, en el plazo y forma establecidos en el Reglamento.

63.3 *La solicitud de registro es de aprobación automática, sujeto a fiscalización posterior.*

63.4 *Los Organismos Promotores de la Inversión Privada de las entidades públicas titulares de proyectos, solicitan su inscripción en este Registro, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a su creación, bajo responsabilidad del titular de la entidad pública.*

Artículo 64. Registro de compromisos

64.1 *El Registro de Compromisos incluye aquellos compromisos firmes y contingentes cuantificables de las garantías, de los pasivos y de los demás instrumentos conexos y colaterales, así como de los ingresos derivados de los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Asociación Público Privada.*

64.2 *Para tal efecto, bajo responsabilidad, la entidad pública correspondiente que posea la información, la suministra al Ministerio de Economía y Finanzas, bajo los términos y condiciones que dicho ministerio establezca.*

64.3 *El Ministerio de Economía y Finanzas emite las disposiciones necesarias para la adecuada aplicación de este artículo.*

Artículo 65. Registro contable

65.1 *El registro contable incluye las transacciones referidas a las obligaciones, las cuentas por cobrar y otros hechos económicos que se generen en el marco de los procesos de promoción de la inversión privada de competencia de las entidades públicas titulares de los proyectos, regulados en la presente ley y en el Decreto Legislativo 674, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la Inversión Privada de las empresas del Estado.*

65.2 *El registro contable de las transacciones está a cargo de la entidad pública titular del proyecto, la cual entrega a Proinversión el resumen financiero de las transacciones y su detalle para efectos del control y de*

la supervisión de dicha entidad, dentro de los plazos que establezca el Reglamento para la aplicación del numeral 65.3.

65.3 Los funcionarios de las entidades públicas titulares de los proyectos e inversionistas están obligados a remitir, bajo responsabilidad, la información requerida por Proinversión, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento.

65.4 En cualquiera de los casos mencionados, las entidades involucradas aplican las normas contables oficializadas y emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 66. Responsabilidad en la remisión de información

El incumplimiento injustificado de la remisión de información a los Registros establecidos en la presente ley, da lugar al inicio del procedimiento sancionador contra el funcionario o servidor responsable de dicha falta, independientemente del régimen laboral al que pertenezca.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Vigencia

La presente ley entra en vigencia al día siguiente de la publicación de su Reglamento, con excepción del artículo 12, la segunda, quinta, sexta, décima sétima y décima octava disposición complementaria final, que entran en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente norma.

SEGUNDA. Reglamento

El Reglamento de la presente ley se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el/la ministro/a de Economía y Finanzas, en el plazo máximo de sesenta (60) días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación de la ley.

TERCERA. Referencia a normativa

A partir de la vigencia de la presente ley, toda referencia que se haga al Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios

públicos, aprobado mediante Decreto Supremo 059-96-PCM; al Decreto Legislativo 1012; al Decreto Legislativo 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, y al Decreto Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, se entiende realizada a la presente norma.

CUARTA. Adecuación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas

En el plazo de noventa (90) días calendario contados a partir de la vigencia de la presente ley, el Ministerio de Economía y Finanzas adecúa su Reglamento de Organización y Funciones conforme a las disposiciones de la presente ley y a lo dispuesto en el Decreto Supremo 054-2018-PCM, con la opinión previa favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros. Dichas modificaciones se financian con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

QUINTA. Adecuación del Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada

En el plazo de noventa (90) días calendario contados a partir de la promulgación de la presente ley, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada adecúa su Reglamento de Organización y Funciones conforme a las disposiciones de la presente ley y a lo dispuesto en el Decreto Supremo 054-2018-PCM, con la opinión previa favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros. Dichas modificaciones se financian con cargo al presupuesto institucional de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

SEXTA. Transferencia de acervo documentario, bienes y personal

En el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles posteriores a la publicación de la presente Ley, los Ministerios, transfieren a Proinversión el acervo documentario, bienes muebles e inmuebles, obligaciones, contratos y recursos, vinculados con su ejercicio como entidad pública titular de proyecto. La

transferencia patrimonial y asunción de derechos y obligaciones por parte de Proinversión operan dentro del plazo referido.

En el mismo plazo, el Ministerio de Economía y Finanzas realiza la transferencia del acervo documentario, vinculada a su ejercicio anterior como ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.

SÉTIMA. Información confidencial

Las evaluaciones económico financieras, incluyendo el modelo económico, así como toda la información vinculada a ellas, utilizadas en cualquiera de las fases de implementación de los procesos de promoción, se encuentran sujetas a la excepción del ejercicio del derecho de acceso a la información, por calificar como información confidencial, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS.

OCTAVA. Habilitación de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión como Sujeto Activo

Habilitar a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -Proinversión para que se constituya como Sujeto Activo en los términos establecidos en la presente Ley y en el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, hasta la suscripción del respectivo contrato de Asociación Público Privada, en los casos en los que ejerza el rol de Organismo Promotor de la Inversión Privada; sin perjuicio de la habilitación para asumir por asignación o delegación la titularidad de los proyectos de Asociación Público Privada.

El cumplimiento de dicha función es financiada con cargo a los recursos institucionales de Proinversión.

La resolución que aprueba el valor de tasación y pago, o la ejecución de la expropiación, según corresponda, es emitida por el Presidente Ejecutivo de Proinversión.







NOVENA. Escala salarial y remuneraciones

1. *Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a aprobar la nueva escala de ingresos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Proinversión bajo el régimen del Decreto Legislativo 728, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas.*
2. *Para efectos de implementar lo dispuesto en el presente artículo, se exonera a Proinversión de lo establecido en el artículo 6 y en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025 – Ley 32185.*
3. *La implementación de la presente disposición se financia con cargo a los recursos del Pliego Proinversión de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y de manera progresiva, para lo cual se le autoriza, durante el año fiscal 2025, a realizar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático para financiar la escala que se apruebe en el marco de lo dispuesto en la presente disposición.*
4. *Para efectos de implementar lo dispuesto en la presente disposición, exonérese a Proinversión del tope de ingresos establecido en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 038-2006.*

DÉCIMA. Herramientas de gestión

Para la implementación de la presente ley, los cambios en la estructura orgánica de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada y respectivos documentos técnicos normativos de gestión organizacional, están sujetos a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 054-2018-PCM que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado.

DÉCIMA PRIMERA. Exceptuar a Proinversión del régimen laboral del Servicio Civil

Proinversión se rige por el régimen laboral de la actividad privada y no está comprendido en los alcances del régimen laboral del Servicio Civil, regulado en la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.

DÉCIMA SEGUNDA. Incorporación excepcional de personal

Autorizar, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2025, a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión, la incorporación de personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, para este efecto, Proinversión se encuentra exonerado de lo establecido en el numeral 8.1 del artículo 8 y el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025 – Ley 32185.

La presente disposición se financia con cargo a los recursos de Proinversión, y de ser el caso con cargo a las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional que se aprueben a favor de dicha entidad en el marco de la Centésima Vigésima Primera Disposición Complementaria Final de la presente ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025 – Ley 32185, pudiendo solicitar la transferencia de dichos recursos para financiar la aplicación de lo establecido en la presente disposición.

DÉCIMA TERCERA. Incorporación excepcional de personal al régimen laboral del Decreto Legislativo 728

Autorizar, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2025, a PROINVERSIÓN la incorporación, a partir del mes de julio de 2025, mediante concurso interno, de los servidores con contrato indeterminado bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad laboral, para este efecto, Proinversión se encuentra exonerado de lo establecido en el numeral 8.1 del artículo 8 y el numeral 9.1 del artículo 9 de la presente ley. Para efectos de la incorporación de personal, a que hace referencia la presente disposición, es requisito que los cargos estructurales se encuentren contemplados en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) y las plazas se encuentren consignadas en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), así como que las plazas o puestos a ocupar se encuentren registrados en el Aplicativo

Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH) del Ministerio de Economía y Finanzas, y que cuenten con la respectiva certificación del crédito presupuestario. La DGGFRH elimina, de oficio, los registros y/o plazas vacantes como resultado del concurso interno. La presente disposición se financia con cargo a los recursos de Proinversión, y de ser el caso con cargo a las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional que se aprueben a favor de dicha entidad en el marco de la Centésima Vigésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 32185 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, pudiendo solicitar la transferencia de dichos recursos para financiar la aplicación de lo establecido en la presente disposición.

DÉCIMA CUARTA. Rol de Entidad Pública Titular del Proyecto de los Ministerios y Entidades del Gobierno Nacional autorizados por ley expresa

Los Ministerios y las entidades públicas del Gobierno Nacional que a la fecha de promulgación de la presente norma ejercen el rol de entidad pública titular del proyecto y hayan suscrito contratos de APP, mantienen su posición contractual, así como todas las competencias y responsabilidades vinculadas con dicho rol, durante el plazo de vigencia del respectivo contrato de Asociación Público Privada, incluyendo las ampliaciones y/o renovaciones de plazo que haya acordado o pueda acordar, dentro de los límites temporales establecidos en el artículo 55.

La función de Proinversión respecto a la emisión del informe no vinculante sobre el contenido, sustento y aplicación de las cláusulas, tiene como objeto a los contratos de Asociación Público Privada descritos en el párrafo precedente.

DÉCIMA QUINTA. Participación de la Contraloría General de la República en los Contratos de Gobierno a Gobierno

Para la suscripción de los contratos o acuerdos de gobierno a gobierno regulados en la Vigésima Disposición Complementaria Final de la Ley 32069, Ley General

de Contrataciones Públicas, se requiere el Informe Previo de la Contraloría General de la República cuando comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado, de conformidad con lo previsto en el inciso l) del artículo 22 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. El plazo para la emisión del Informe Previo es de quince (15) días hábiles, pudiéndose solicitar información adicional por única vez dentro de los primeros cinco (05) días hábiles. En este supuesto el cómputo del plazo se suspende desde el día de efectuada la notificación de información adicional, reanudándose a partir del día hábil siguiente de recibida la información requerida.

DÉCIMA SEXTA. Ventana para la presentación de Iniciativas Privadas Cofinanciadas ante Proinversión

Establécese hasta el 31 de diciembre de 2026, el plazo para la presentación de iniciativas privadas cofinanciadas para el desarrollo de proyectos de Asociaciones Público Privadas en infraestructura pública, servicios públicos o servicios vinculados a estos, de alcance nacional.

DÉCIMA SÉTIMA. Reglas adicionales de Titularidad de Proyectos

Proinversión, con excepción de los proyectos del sector electricidad, asume el rol de entidad pública titular del proyecto de los contratos de APP suscritos dentro de los doce (12) meses previos a la promulgación de la presente ley, que tengan un costo total de inversión superior a las 80 mil (80,000) UIT. Para tal efecto, Proinversión y los inversionistas de los respectivos contratos de APP, adoptan los actos de ejecución contractual necesarios para implementar la presente disposición, sin que sea necesario la suscripción de adendas para la modificación contractual.

El Estado peruano ratifica las seguridades y garantías otorgadas en el marco de los respectivos contratos de APP, así como la validez de los convenios de estabilidad jurídica suscritos al amparo de la normativa vigente y demás derechos adquiridos a la fecha. Dentro de los treinta (30) días de promulgada la

presente ley, a solicitud del inversionista, se emiten los actos necesarios para dar cumplimiento a la presente disposición.

Proinversión hace efectivo la función de asumir el rol de entidad pública titular del proyecto al día siguiente de la entrada en vigencia del Reglamento de la presente ley.

DÉCIMA OCTAVA. Fondo para la administración de la retribución de contratos de infraestructura de transporte

Se crea el Fondo para la administración de la retribución de contratos de concesión de infraestructura de transporte (FONRECIT) que permita el uso y disposición a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de los recursos pagados por los concesionarios del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez" y del Contrato de Concesión del Tramo Vial Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica (Red Vial 6), para el desarrollo de inversiones de infraestructura de transporte y/o actividades, en el marco de lo establecido en los referidos contratos.

El FONRECIT tiene carácter intangible y se financiará con los montos pagados por los concesionarios por concepto de retribución conforme a lo previsto en los respectivos contratos de fideicomiso de cada concesión. El MTC será el encargado de administrar el FONRECIT. Los recursos que constituyen este Fondo no son considerados fondos públicos.

Mediante decreto supremo, el MTC emitirá las disposiciones reglamentarias aplicables al FONRECIT en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente norma. Las disposiciones deberán incluir las reglas y procedimientos para asegurar la disponibilidad de los recursos de los proyectos de competencia de Proinversión en su rol de entidad pública titular del proyecto.

El MTC queda facultado para la aprobación de los procedimientos que resulten necesarios para la correcta administración del Fondo.



La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación del decreto supremo emitido por el MTC.

DÉCIMA NOVENA. Plan Nacional de Infraestructura

El Ministerio de Economía y Finanzas, considerando principalmente el Programa Multianual de Inversiones de los Sectores, el decreto supremo que contiene la relación de proyectos priorizados que serán desarrollados mediante Asociación Público Privada a cargo de Proinversión y la sostenibilidad fiscal, propone cada cinco (05) años un Plan Nacional de Infraestructura para la aprobación del Consejo de Ministros. Progresivamente, se puede incorporar la información del Programa Multianual de Inversiones y del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales, según corresponda. El Reglamento establece los criterios y procedimientos para la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Infraestructura, incluyendo y sin limitarse el enfoque territorial.



La temporalidad para la aprobación del Plan Nacional de Infraestructura, señalada en el párrafo precedente, aplica a partir de la vigencia de la tercera edición del Plan.



DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. Iniciativas privadas o iniciativas estatales en trámite

Los proyectos de Asociación Público Privada, indistintamente que se hayan originado por iniciativa estatal o iniciativa privada, que a la fecha de promulgación de la presente ley se encuentren en la fase de Transacción se sujetan al procedimiento aplicable al momento de su admisión a trámite.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación de normas

Derógase el Decreto Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y el Decreto Legislativo 1543, Decreto Legislativo que dicta

medidas para mejorar la gestión de proyectos y los procesos de promoción de la inversión privada.

Comuníquese a la señora Presidenta de la República para su promulgación.

En Lima, a los nueve días del mes de mayo de dos mil veinticinco.

EDUARDO SALHUANA CAVIDES
Presidente del Congreso de la República

CARMEN PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

A LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA